

“DEMOCRACIA Y ORGANIZACIONES SOCIALES.  
ESTUDIO DE CASO SOBRE EL IMPACTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE  
TERRITORIAL EN LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS”

Tesis presentada para optar por el Grado de Magister en  
Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo

ante

Universidad Nacional de San Martín – Escuela de Política y Gobierno  
Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo  
y

Georgetown University – Graduate School of Art & Sciences  
Master of Arts in Development, Management & Policy

Lic. Micaela Fernanda Moreira

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014

“DEMOCRACIA Y ORGANIZACIONES SOCIALES.  
ESTUDIO DE CASO SOBRE EL IMPACTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE  
TERRITORIAL EN LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS”

Licenciada Micaela Fernanda Moreira

Directora: Doctora Cecilia Schneider

RESUMEN

El presente trabajo se propone abordar los modos en que las organizaciones sociales de base territorial surgidas a mediados de los años noventa en la Argentina, han contribuido a modificar la relación entre el Estado y la sociedad civil, haciendo foco en el impacto que las estrategias políticas desarrolladas por los actores colectivos han tenido sobre las instituciones democráticas y sobre el modo de hacer política.

ABSTRACT

The present thesis analysis the different ways in which social and territorially based organizations emerged during the nineties in Argentina, have contributed to modify the relation between State and civil society, focusing on the impacts that political strategies developed by the collective actors have had on democratic institutions and on the creation of new strategies for political action.

## AGRADECIMIENTOS

El desarrollo de esta tesis y mi paso por la maestría en la que se encuentra enmarcada no habrían sido posibles sin el apoyo incondicional de mi madre, Hersilia, mi hermana Jimena y mi compañero de vida Hernán, a quienes en gran parte va dedicado este trabajo.

Extiendo mi gratitud a todos los entrevistados que sin conocerme entregaron desinteresadamente una de las cosas más valiosas e incommensurables que los seres humanos pueden dar: su tiempo.

Por último quisiera agradecer a mi directora de tesis, Cecilia Schneider, cuyas sugerencias aportaron luz en los momentos de oscuridad y a Luciano Andrenacci cuyos comentarios significaron el empujón final para presentar este trabajo.

## ÍNDICE

Introducción.....	6
Capítulo I: Diseño de la Investigación.....	14
Capítulo II: Marco Teórico - Teorías que abordan los Movimientos Sociales.....	18
Movimientos sociales y democratización.....	26
Capítulo III: Antecedentes del FPDS. Reconstrucción del movimiento piquetero.....	34
Las reformas neoliberales. Argentina. 1970-1990.....	35
Las reformas y el surgimiento del movimiento piquetero.....	39
Crisis de los movimientos de trabajadores desocupados.....	45
Puente Pueyrredón y Después.(2002-2008).....	49
Capítulo IV: El Frente Popular Darío Santillán.....	56
El problema de la burocratización y el porqué de la pirámide invertida.....	58
Estructura organizativa: la pirámide invertida y la asamblea.....	62
De lo ideal a lo real. La cuestión del referente.....	68
El problema del consenso.....	70
¿Qué se forma en la formación? Las dos dimensiones de la Autonomía.....	73
Los efectos producidos por el FPDS.....	77
Conclusiones.....	89
Anexo I.....	94
Bibliografía.....	97

## LISTADO DE GRÁFICOS Y CUADROS

### **CUADROS**

Cuadro 1. Organizaciones que integran el FPDS según su pertenencia regional..... 64

### **GRÁFICOS**

Gráfico 1. Evolución de la Tasa de Desempleo a nivel nacional 1974-2002.....40

Gráfico 2. Evolución del coeficiente de GINI - Argentina 1974- 2010.....41

Gráfico 3. Evolución Anual de Cortes de Ruta, 1997, 2002.....46

Gráfico 4. La pirámide invertida.....68

## INTRODUCCIÓN

La desactivación política de la ciudadanía, la desarticulación de las redes sociales y la pérdida de centralidad de los partidos en América Latina, son algunos de los saldos de los pasados regímenes autoritarios que azotaron la región durante las últimas décadas del siglo XX. El retorno democrático debió afrontar durante el decenio de 1980 un contexto socio-económico hostil de hiperinflación y pobreza extrema que puso fin a los modelos de organización social con eje en el Estado dejando espacio en los noventa al paradigma neoliberal que plantea su reducción a una mínima expresión (Torre: 1998; Finot: 2001; Cavarozzi: 1991; Navarro: 1995; Smith: 1993; Torre: 1998; Acuña: 2011). Las políticas de ajuste promovidas por el Consenso de Washington provocaron una excesiva dependencia de las economías latinoamericanas al financiamiento externo que culminó en desequilibrios sociales internos dando lugar a una proliferación de organizaciones sociales en el seno de la sociedad civil que intentaron atenuar los costos de la reestructuración neoliberal (Tomassini: 2002; Camou et al: 2007). En Argentina, la fuerte reacción de la ciudadanía contra la clase política cristalizó además un proceso iniciado durante los años noventa en que “nuevos movimientos sociales, ciudadanos activos, diversas asociaciones civiles y unos pocos partidos políticos parecen exigir una democracia más receptiva de los intereses ciudadanos y promueven diseños institucionales de participación que complementen los ofrecidos por la democracia representativa” (Schneider: 2007a y 2007b). Considerando que las reformas estructurales de los noventa contribuyeron a la proliferación de entidades de la sociedad civil como nuevos actores de canalización de demandas allí donde el Estado perdió protagonismo y los partidos políticos perdieron representatividad (Shuster et al: 2002; De Piero: 2005; Ippólito y O’Donnell: 2008; Svampa y Pereyra: 2009; Dinerstein: 2004;

Della Porta y Diani: 2011) creemos que los Estados se encuentran hoy frente a la exigencia de una mayor participación por parte de distintos actores sociales y políticos (Schneider: 2007b; Schneider y Welp: 2010 ) que a su vez promueven un nuevo tipo de activación política entre sus miembros. Nuestra hipótesis de investigación es que las actividades desarrolladas por organizaciones sociales de base territorial desde mediados de los noventa y hasta la actualidad, tienen una incidencia positiva en el funcionamiento de las instituciones democráticas, por un lado, al agregar demandas al sistema y promover la resolución de las mismas y por el otro al facilitar la intervención de los ciudadanos en los procesos comunicativos de discusión y definición de sentidos y preferencias que las instituciones democráticas garantizan.

Resulta interesante señalar que si bien la aparición de movimientos sociales territoriales como lo fueron las organizaciones de trabajadores desocupados despertó un gran entusiasmo en el ámbito académico argentino a fines de la década del noventa y en los años consecuentes a la crisis de 2001; a partir del 2006 y 2007 pareció registrarse una disminución de estos estudios (Pacheco: 2010) de manera coincidente con el corrimiento de dichos movimientos de la escena pública o su aparición bajo otras formas organizativas. El saneamiento de la crisis económica desatada con mayor fuerza en 2001 y las estrategias gubernamentales respecto de estos sectores son factores relevantes para entender la reconfiguración de la arena política y la posición de los sectores populares en relación al Estado (Svampa y Pereyra: 2009; Svampa: 2008), consecuentemente es preciso preguntarse sobre la validez explicativa de estos movimientos y sobre la de nuestro caso de estudio. En primer lugar, el estallido social de diciembre de 2001 pareció inaugurar una serie de procesos participativos y demandas ciudadanas en la forma de asambleas y organizaciones sociales que a simple vista respondían al malestar coyuntural

provocado por el rompimiento de la paridad cambiaria o a la ineficiencia estatal en la implementación de políticas sociales que contuvieran a los excluidos del modelo económico. Estas lecturas sobre la crisis resultaban consecuentes con los diagnósticos mediáticos pesimistas que informaban altos índices de apatía sobre los argentinos (y especialmente los jóvenes) respecto de la política y sus instituciones<sup>1</sup>. Sin embargo, el desarrollo y crecimiento de las organizaciones sociales populares parecían, cuando menos, mitigar aquellos pronósticos de indiferencia. Tanto en el interior del país, pero sobre todo, en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, era posible constatar la existencia efectiva de un enorme número de organizaciones sociales en ciernes que incentivaron algunas de las preguntas que guían hoy este trabajo sobre el origen, las causas, los motivos, que intervienen en la activación o apatía de los sujetos en relación a la política y, posteriormente, en las formas que adquiere esa participación.

En segundo lugar la pregunta fundamental que inaugura esta investigación sobre por qué elegir el Frente Popular Darío Santillán (en adelante FPDS) para estudiar la incidencia de las organizaciones de base territorial en el sistema democrático se actualizó durante el trabajo de campo a medida que los entrevistados solicitaban la explicación de nuestro interés en sus prácticas. Estos intercambios nos hicieron reflexionar sobre las características distintivas de la organización y sus potencialidades explicativas sobre los efectos que las dinámicas políticas colectivas y assemblearias tienen entre sus militantes y en el tipo de relación que las organizaciones territoriales construyen con las instituciones. Por un lado creemos que una particularidad del FPDS es la posición crítica que asumió respecto del gobierno del Frente Para la Victoria (FTV) desde su origen; el dato cobra relevancia si tenemos en cuenta que se ha

---

<sup>1</sup> Carini, M., “La indiferencia de los porteños”, 14 de abril 1996, *La Nación*; “Los jóvenes y las próximas elecciones”, 19 de septiembre de 1999, *Clarín*, Editorial.



desarrollado y crecido en forma paralela a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner aún a contrapelo del corrimiento de los piqueteros de la escena pública y la tendencia opuesta que otras organizaciones sociales (populares) de alcance nacional mostraron al apoyar el proyecto político del FTV<sup>2</sup>. Los motivos de estos corrimientos abonan aún más la particularidad de la organización si tenemos en cuenta que las estrategias desplegadas desde el Estado para contener los movimientos de trabajadores desocupados incluyeron la judicialización de la protesta<sup>3</sup> y la institucionalización (o cooptación) de estos movimientos -capitalizando las diferencias y rupturas que habían sufrido las organizaciones sociales a fines de 2001 y luego de los fuertes episodios represivos de 2002 (Svampa y Pereyra: 2009)-. De manera que, si bien el FPDS en el 2004 podía ser una organización más entre varias de su tipo, se destacaba sin embargo por asumir una fuerte vocación autonómica en un contexto de redistribución de la correlación de fuerzas del campo popular en muchos sentidos adverso (Svampa: 2008). Por otro

---

<sup>2</sup> Dos ejemplos de ello lo constituyen los casos de la FTV y el Movimiento Evita. La FTV (una de las organizaciones con mayor capacidad de movilización que se organiza mucho antes que el FPDS y el Movimiento Evita), mantuvo casi desde el comienzo de la gestión del Frente para la Victoria una actitud favorable o de apoyo explícito a las políticas de gobierno. El Movimiento Evita nace en 2003 de la fusión de una serie de movimientos sociales con el apoyo directo del Presidente Néstor Kirchner acreditando un crecimiento sostenido hasta la actualidad en que se ha convertido un actor relevante del conurbano bonaerense, siendo capaz de movilizar hasta 70.000 personas (Ver Sued, G. (17 de enero de 2012), El Movimiento Evita, otro polo de poder en el kirchnerismo, *La Nación*, Política. y Movimiento Evita: el aliado silencioso del kirchnerismo, 22/06/2012, *El Estadista*.

<sup>3</sup> Nos referimos a aquellos casos en que participantes de manifestaciones políticas son acusados en sedes judiciales de atentar contra el orden público forzando los alcances de la ley. Para un análisis detallado sobre este tipo de accionar puede consultarse el informe del CELS (2003): “El Estado frente a la protesta social, 1996-2002”. Algunos ejemplos de este tipo de prácticas durante el período estudiado lo constituyen la causa por sedición activada contra las organizaciones piqueteras que cortaron el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002 (que debió ser desestimada luego de que miembros de la prensa revelaran imágenes de las ejecuciones de dos militantes por parte de oficiales de la policía federal); la detención de 17 piqueteros en la provincia de Santa Cruz por ocupar en 2004 la planta petrolera de Terminales Marítimas Patagónicas (TerMAP); la detención en 2005 de Cristian Ruiz, representante de desocupados de Cañadón Seco (provincia de Santa Cruz); la imputación en 2005 de 84 manifestantes que reclamaban mayor control estatal sobre los servicios públicos privatizados en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires; o los 546 procesados en la provincia de Neuquén por participar en protestas sociales (ver: *Río Negro*, fecha 16/05/2011, “Hay 546 procesados por protestas sociales”, disponible en <http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=624049&idcat=9521&tipo=2>.

Para abundar en más casos de detenciones, imputaciones o procesamientos de militantes sociales durante el período 2003-2010 pueden consultarse los siguientes informes: “Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Gobierno Kirchner/2005”, publicado por Alerta Argentina en 2006 y “Derechos humanos en Argentina. Informe 2010”, publicado por el CELS en 2010.

lado, creemos que el caso del FPDS pone de manifiesto las tensiones y contradicciones que los gobiernos de la última década han tenido que atravesar frente a la reconfiguración del campo popular y el surgimiento de movimientos sociales de nuevo tipo. Teniendo en cuenta que si bien durante los últimos diez años se han mostrado alternativas al modelo neoliberal que había sido instalado en la Argentina, y que existe un consenso generalizado sobre un “giro a la izquierda” en la región (Panizza: 2005; Castaneda: 2006; Arditi: 2008; Ramírez Gallegos 2006; Schamis: 2006; Paramio: 2006; Gallo: 2014) caracterizado -en un primer momento- por los gobiernos de Chávez en Venezuela, Inácio da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Néstor Kirchner en Argentina; creemos que una mirada más próxima a esas experiencias puede atenuar la presunta radicalidad que contiene la idea de “giro a la izquierda”. En relación al caso de Argentina, entendemos que dicha percepción se liga en gran parte a la retórica oficial que tiende a invocar el pasado modelo keynesiano estatal (en su versión latinoamericana) y revalorizar las organizaciones de izquierda de la década del setenta; sin embargo los cambios estructurales radicales -característicos de los paradigmas ideológicos “sententistas”- se distancian bastante de las políticas desplegadas por el gobierno argentino desde el 2003 en adelante. En este sentido, el contraste con algunos sectores de los movimientos de trabajadores desocupados (como el que hemos seleccionado para nuestro caso de estudio) que también reivindican esos modelos (“del pasado”) pero en oposición a las políticas del gobierno, puede ayudarnos a problematizar las dimensiones del actual rol del Estado y el sentido que ha adquirido lo *político* durante la última década.

Si bien los objetivos de este trabajo no incluyen discutir la naturaleza ideológica de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, creemos que poner en diálogo las estrategias estatales con las de organizaciones territoriales opositoras permite contrastar

algunas estrategias fundamentales de las fuerzas sociales en pugna que nos interesa trabajar. Por otro lado reconocemos que la percepción del giro ideológico en la región no es solamente producto de especulaciones políticas sino que se debe en parte a un análisis acertado del significado del surgimiento y consolidación de nuevos movimientos sociales que demostraron un fuerte desacuerdo hacia las políticas liberales y medidas económicas ortodoxas de los noventa, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los Movimientos de Trabajadores Desocupados en Argentina o el partido político Movimiento al Socialismo en Bolivia. Estos movimientos impactaron la arena política asumiendo la representación de vastos sectores sociales e incluso han acompañado y legitimado los gobiernos mencionados (Tapia: 2006). Reconocemos entonces que algo ha sucedido en la región y que no puede ser aducido a una coincidencia. Sin embargo es preciso matizar la idea de “giro a la izquierda” puesto que no podemos abordar a los movimientos sociales ni al Estado como conglomerados compactos y homogéneos. Realizar este ejercicio nos permitirá también entender las estrategias desplegadas por el Frente Popular Darío Santillán en relación con las instituciones de gobierno y otras organizaciones sociales y políticas. Si bien desarrollaremos esta cuestión en el capítulo cuatro, resulta pertinente adelantar que el tipo de relación que el FPDS construye con las instituciones estatales y democráticas desde el advenimiento del kirchnerismo como nueva fuerza social se tiñe de tensiones surgidas de los valores que el FPDS promueve entre sus integrantes, los objetivos de construcción política y social que se propone y por el sentido que el discurso kirchnerista le imprime a la política y a las prácticas políticas de los sectores populares. Creemos por ello que el caso seleccionado, nos permite recuperar los escurridizos matices que existen allí donde el Estado se solapa con la sociedad civil -y la

sociedad civil con el Estado- y adoptar una perspectiva crítica sobre las políticas sociales entendidas como “participativas” o de “izquierda” de las últimas décadas.

Gran parte de los estudios sobre movimientos sociales abordan la aparición de estas organizaciones como respuesta a una coyuntura particular en la que se ponen en discusión algunas instituciones centrales de la democracia occidental clásica (el gobierno representativo, los partidos políticos, los sindicatos) que (sin perder legitimidad) es apelada por la ciudadanía en la búsqueda de una reconfiguración institucional (Natalucci et al: 2013; Annunziata: 2013; Schneider: 2007a y 2007b). El contexto crítico que enmarca el surgimiento de estos movimientos pone de manifiesto una crisis de representación que se expresa en dos procesos: por un lado el distanciamiento de los partidos políticos y los sindicatos de sus bases sociales (Abal Medina: 2004, Svampa y Pereyra: 2009; Gallo: 2010); y por otro lado el surgimiento de una demanda de mecanismos participativos que buscan diluir las barreras de acceso a los espacios decisionales de lo público (Schneider: 2007b; Schneider y Welp: 2011; Annunziata: 2008)<sup>4</sup>. Nos interesa trabajar cómo se reconfiguró o se está reconfigurando la relación entre el Estado y la sociedad civil, qué factores intervienen positiva y negativamente en dicha relación y cómo son las formas y canales de participación política que se han abierto o institucionalizado en esta relación. Por otro lado, entendemos que si bien los movimientos de trabajadores desocupados (MTD) han sido analizados en relación con los cambios coyunturales y estructurales que explican su aparición (Oviedo: 2001; Delamata: 2004; Svampa y Pereyra: 2009; Dellaporta y Diani: 2011), su

---

<sup>4</sup> Resulta interesante que la crisis institucional que atravesó la Argentina, no haya derivado en un cuestionamiento a la legitimidad de la democracia como sistema, tal como lo expresan los índices para la serie de tiempo 1995-2011, publicados por la Cooperación Latinobarómetro para Argentina; en la que se indica que un 58,7 % de los entrevistados se mostró “de acuerdo” con la afirmación “la democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno”, un 29,6 % se mostró “muy de acuerdo”, un 9,9 % lo hizo en “desacuerdo” y 0,6 % “muy en desacuerdo”. Disponible en: <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>.

potencialidad política y su relación con el Estado (Svampa y Pereyra: 2009; Cerrutti y Grimsom: 2004; Svampa: 2004); y la conformación de nuevas identidades (Longa: 2013; Svampa y Pereyra: 2009; Massetti: 2004; Quirós: 2006; Vázquez y Vommaro: 2009); se ha trabajado poco sobre sus efectos, es decir su rol en la reconstrucción de los lazos institucionales que constituyen el sistema democrático.

Hemos dedicado el segundo capítulo de esta tesis a revisar los aportes de la literatura clásica sobre movimientos sociales que nos permitan plantear la naturaleza de la relación entre estos últimos con el sistema democrático y caracterizar los efectos que observamos durante el trabajo de campo; un tercer capítulo en el que reconstruimos el desarrollo histórico de las organizaciones territoriales de base que constituyeron el movimiento de trabajadores desocupados y los antecedentes de nuestro caso de estudio y un cuarto apartado en el que desarrollaremos un análisis específico sobre el Frente Popular Darío Santillán y sus efectos sobre las instituciones democráticas.

## **Capítulo I**

### **Diseño de la investigación**

Teniendo en cuenta la recomposición (aunque parcial) del rol social del Estado en la mediación política y el aumento del grado de participación política de la ciudadanía durante la década reciente, nos propusimos analizar cómo se modificó la relación entre las instituciones estatales y las organizaciones populares con el fin de esclarecer el grado y peculiaridades de la participación política que los movimientos sociales canalizan, a qué sectores está supeditada y cómo afecta o impacta a la representatividad del sistema democrático y, por extensión, a su gobernabilidad. Para ello, hemos realizado un estudio de caso utilizando como unidad de análisis el Frente Popular Darío Santillán, organización política y social de base territorial surgida en el 2004, en base al cumplimiento de los requisitos constitutivos de los agrupamientos de ese género propuestos por Tilly y Wood (2010) de acuerdo a la constatación de las siguientes características: a) un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes reivindicaciones colectivas; b) el uso combinado de formas de acción política - creación de asociaciones, reuniones públicas, procesiones, vigiliyas, manifestaciones, peticiones, declaraciones en medios de comunicación, etc.- (repertorio); c) manifestaciones de valor, unidad, número y compromiso de los actores y su circunscripción (WUNC).

Las entrevistas y el análisis del material documental de nuestra base empírica nos hicieron advertir la importancia de focalizar nuestras observaciones en la estructura organizativa interna del FPDS y sus estrategias particulares de acción política.

Con el fin de comprender los significados y sentidos específicos configurados por los actores, hemos realizado una reconstrucción histórica de las relaciones entre el Estado y los

movimientos de trabajadores desocupados desde su surgimiento a mediados de los noventa hasta la actualidad, teniendo en cuenta como factor explicativo de peso en la evolución de esas relaciones las reformas estructurales aplicadas al Estado argentino durante los últimos treinta años.

Hemos realizado un marco teórico que permite analizar las particularidades de nuestro caso de estudio para lo cual retomamos con fuentes secundarias las discusiones actuales sobre los movimientos sociales y desarrollamos el proceso de formación del FPDS durante el período 2004-2010.

En función de los recursos disponibles para la realización de este estudio se priorizó la utilización de una metodología cualitativa que incluyó: a) revisión bibliográfica para el armado del marco teórico; b) un total de 18 entrevistas en profundidad a integrantes y ex-integrantes de la organización; c) análisis de debates parlamentarios a través de fuentes secundarias a propósito de hitos de comportamiento del ideario del movimiento para determinar la capacidad de las organizaciones de instalar problemáticas específicas; d) análisis de fuentes primarias y secundarias.

Las entrevistas se realizaron a nueve hombres y nueve mujeres mayores de 18 años que cumplieran como único requisito el de reconocerse a sí mismos como integrantes o ex-integrantes del FPDS. Se privilegió el contacto con personas que desarrollan sus actividades de militancia política en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en localidades de la zona sur del Conurbano Bonaerense, por ser las áreas donde se concentran la mayor parte de la

actividad de las organizaciones que forman parte del FPDS<sup>5</sup>.

Los objetivos generales y específicos que hemos establecido para este trabajo son los siguientes:

Objetivos Generales:

- Analizar el rol de las organizaciones sociales de base territorial en la recomposición de la relación entre la ciudadanía y las instituciones estatales y como formas de respuesta a la desaparición del Estado en la década del '90;
- Estudiar los efectos de la crisis de representación política en las agendas y estrategias de las organizaciones sociales de base territorial.
- Distinguir y evaluar el impacto de los mecanismos de participación política implementados por las organizaciones de base territorial como alternativas viables para el fortalecimiento democrático.

Objetivos específicos:

- Analizar el tipo de mediación que realizan las organizaciones sociales de base territorial y su impacto en la construcción de la opinión pública; en la generación de debate público, en la agregación de intereses, preferencias y expectativas ciudadanas.
- Analizar la relación existente entre los partidos políticos y las organizaciones sociales entendidas éstas como nuevas instancias de vinculación política.
- Identificar y analizar las tareas y estrategias desarrolladas por diferentes organizaciones de la sociedad civil destinadas a estimular la participación ciudadana.

---

<sup>5</sup> De las entrevistas surge que la delimitación territorial de las actividades de cada participante obedece a criterios de pertenencia original, radicación del lugar de trabajo así como a las necesidades de la organización o en base a un interés específico de los participantes.



- Identificar y analizar los efectos institucionales provocados por el accionar de las organizaciones sociales de base territorial sobre las instituciones de gobierno (legislativas y ejecutivas).

## **Capítulo II**

### **Marco Teórico: Teorías que abordan los Movimientos Sociales**

Los estudios sobre movimientos sociales que comienzan a surgir a mediados de los sesenta y principios de los setenta coinciden en observar una relación más o menos directa entre el surgimiento de nuevas agrupaciones y la configuración de identidades en función de rasgos de origen o pertenencia cultural, por fuera de los clivajes tradicionales de clase que operaron en las sociedades industriales desde el siglo XIX (Touraine: 1988; Diani: 1992; Offe: 1992, Tilly y Wood: 2010; Tarrow: 2004; Della Porta y Diani: 2011). Asimismo, el advenimiento del neoliberalismo en América Latina tuvo su contraparte social en el surgimiento de movimientos de nuevo tipo expresados en las organizaciones de trabajadores desocupados que como veremos, también supuso la configuración de un nuevo sujeto social (Svampa y Pereyra: 2009).

La literatura vigente sobre los movimientos sociales puede ser agrupada en dos grandes corrientes; por un lado encontramos cuerpos teóricos que enfatizan la relación de estas agrupaciones con otras estructuras sociales o instituciones, mientras que por otro lado, encontramos teorías cuyo interés está puesto en la explicación de los procesos o estructuras internas de los movimientos que permitan explicar el modo en que se configuran las identidades de sus participantes. En el primer grupo ubicamos a la teoría del comportamiento colectivo y la teoría de la movilización de recursos y en el segundo agrupamos los trabajos que se inscriben en la teoría denominada de los nuevos movimientos sociales. Si bien nuestra separación resulta arbitraria, la hemos hecho sin la intención de presentar un ordenamiento exhaustivo sino funcional a los objetivos de nuestro trabajo con el fin de obtener un panorama general de cada uno de ellos y de los aportes conceptuales que tomaremos para el abordaje del objeto de estudio.

Intentaremos en los párrafos que siguen poner en diálogo estos enfoques y presentar los interrogantes que nos llevaron a explorar el campo.

La teoría del comportamiento colectivo se desarrolla en el marco del interaccionismo y el construccionismo simbólicos; los trabajos allí inscriptos afirman que los fenómenos colectivos no son simplemente el reflejo de una crisis social sino una actividad que apunta a la creación de nuevas normas y solidaridades (Berrio Puerta: 2006); sin embargo a menudo se recurre a enfatizar los momentos críticos, esporádicos, en que surge la acción colectiva en detrimento de un desarrollo mayor sobre las estrategias de organización interna de los movimientos; consecuentemente el surgimiento de grupos sociales queda ligado a situaciones de insatisfacción y a la incapacidad de las instituciones vigentes de darles alguna respuesta o contenerlos. Si bien una perspectiva como esta nos permite incorporar una dimensión simbólica al análisis de las estrategias de acción de los movimientos sociales, resulta limitada a la hora de indagar sobre los motivos que explican la perdurabilidad y transformaciones de las organizaciones, los procesos creativos que intervienen en la configuración de normas y valores al interior de los movimientos y en qué modo esos “sentidos” operan en la interacción de los integrantes de la organización con otras organizaciones y con las instituciones democráticas. Dicho de otro modo, nos interesa analizar las actividades prefigurativas que despliegan las organizaciones y hacer hincapié en lo que entendemos son estrategias de creación de identidad colectiva, promoción de valores y manifestaciones colectivas, para constatar la hipótesis de que tales actividades colaboran en la profundización, difusión, recuperación y acercamiento de las instituciones democráticas a los sujetos (Offe: 1992, Tilly y Wood: 2010; Warren: 2001) y en la activación de mecanismos de

control social y participación política (Warren: 2006; Natalucci et.al: 2013) allí donde tales mecanismos habían sido invisibilizados a los sectores populares. Por otro lado, aún cuando nos interesa explorar los procesos internos mencionados, creemos necesario incorporar una mirada amplia sobre los movimientos sociales en la medida en que sólo así se logra la comprensión de procesos tan complejos como los que despiertan nuestro interés. En este sentido, es necesario encontrar explicaciones a las causas que incentivan la movilización de los sujetos, los factores que posibilitan su desarrollo, los modos en que definen sus objetivos, su éxito o fracaso (Tarrow, 2004; Tourain: 1988; Tilly y Wood: 2010). Para ello, examinaremos la forma en que la organización seleccionada moviliza sus recursos, los vínculos que ha generado con otros grupos y las estrategias desplegadas para relacionarse con las instituciones democráticas buscando destacar las particularidades de la interacción entre los movimientos sociales y la política institucionalizada. Si bien, los trabajos enmarcados en la teoría de la movilización de recursos nos han provisto de aportes más que sustantivos sobre cómo examinar estos aspectos, nuestra intención es lograr explicaciones más específicas sobre los vaivenes de la relación entre movimientos sociales e instituciones estatales; no sólo afirmar la existencia o inexistencia de algún tipo de correspondencia entre ambos sino especificar de qué manera se afectan mutuamente. En tal sentido, creemos que incorporar como factor explicativo la forma de organización interna de las organizaciones puede acercarnos a ese objetivo.

Como mencionamos al comienzo de este capítulo, han aparecido en los últimos años, enfoques de tipo subjetivo como la teoría de los nuevos movimientos sociales. Tal vez uno de los aportes más interesantes de esta perspectiva sea haber advertido que la clásica división analítica entre Estado y sociedad civil ha quedado desactualizada para entender una serie de procesos

sociales que demuestran una fusión creciente entre las esferas de lo político y lo “no-político” en los que los ciudadanos comenzaron a ocupar el lugar de actores primarios (Schneider: 2007a y 2007b; Schneider y Welp: 2011; Rosanvallon: 2009). Este diagnóstico se vió apoyado por tres fenómenos: a) el aumento de ideologías y actitudes “participativas” que llevaron a la gente a servirse cada vez más de los mecanismos democráticos a su disposición; b) el uso creciente de formas no institucionales de participación como las protestas y manifestaciones; c) las exigencias y conflictos políticos sobre cuestiones que solían considerarse como temas morales (como el aborto) o económicos (como la humanización del trabajo) (Offe: 1992). La frecuencia en el uso de canales para la interpelación al Estado no fue lo único que indicaba un cambio a nivel social sino que los nuevos movimientos sociales evidenciaron una actitud de confrontación en la que lo que se ponía en duda era la idoneidad y suficiencia de tales canales de comunicación con el Estado (Schneider: 2007a y b) y la intención de los ciudadanos de ejercer un mayor control sobre las elites políticas poniendo en acción medios que presionan sobre el orden institucional. La complejidad de estos procesos, requirieron entonces la incorporación de otras dimensiones de análisis a los movimientos sociales como la orientación cultural o el modo de apropiación de la historicidad de los modelos culturales de inversión, de conocimiento y moralidad que guían las acciones de los movimientos (Tourain: 1988).

Por otro lado, si bien existe un acuerdo sobre el surgimiento de un nuevo tipo de movimientos aún no hay un consenso definido sobre qué es lo que constituye su carácter novedoso (Berrio Puerta: 2006). Claus Offe (1992) propone como método de identificación la verificación de dos requisitos mínimos: por un lado la intención de él/los actores de que su práctica sea reconocida como un medio legítimo de acción y por otro lado que los objetivos de la

acción sean asumidos por la “comunidad amplia”. Si bien es cierto que tales características son observables en los movimientos sociales, ¿no son acaso estos objetivos compartidos por las organizaciones sociales clásicas de las que buscamos diferenciarlos?. En relación a la *búsqueda de legitimidad de los medios de acción* podría argumentarse en favor de este criterio que en el caso de los movimientos de trabajadores desocupados existe una tensión permanente en relación al reconocimiento del “piquete” como forma de expresión, sin embargo es posible sostener también que el corte de rutas o calles no se aleja totalmente de los parámetros definidos por las normas vigentes para la manifestación de demandas y expresiones políticas<sup>6</sup>, es decir que su legitimidad en términos formales ya estaría establecida aún cuando el ejercicio de ese tipo de reclamo entra en conflicto con el derecho a la libertad de circulación y genera tensiones con distintos sectores sociales. Lo mismo podría pensarse sobre otro tipo de demostraciones públicas que si bien son novedosas (en el sentido de que se apartan de las clásicas marchas y actos públicos o declaraciones en medios de comunicación) como las intervenciones artísticas a determinados espacios o los escraches a figuras que encierran algún tipo de representación, difícilmente podamos decir que se apartan de los parámetros reconocidos como legítimos en las sociedades democráticas contemporáneas<sup>7</sup>. En cuanto al segundo aspecto planteado por Offe relativo a la *búsqueda de reconocimiento por parte de una comunidad amplia*, no encontramos grandes distancias entre los esfuerzos de los partidos políticos por lograr la adhesión de la ciudadanía a un programa político y los potenciales objetivos de los movimientos sociales de

---

<sup>6</sup> De hecho sólo recientemente fue aprobada una ley que redefine los límites de las manifestaciones en la vía pública y que ha generado un fuerte debate en el que se discute si dicha normativa recorta o no la libertad de los ciudadanos de manifestar sus posiciones políticas públicamente.

<sup>7</sup> Nos referimos a los sistemas democráticos que cumplen con los requisitos establecidos por Robert Dahl (1989) para ser definidos como poliarquías.

ganar el apoyo de la población sobre determinadas demandas. Aún cuando en el segundo caso el reconocimiento de la comunidad tiene un objetivo más concreto -aumentar la capacidad de presión de los movimientos sobre las instituciones estatales- tanto en un caso como en otro lo que estamos observando como objetivo es la búsqueda de adhesión de la ciudadanía, de manera que estos requisitos no serían del todo precisos a la hora de diferenciar “nuevos movimientos sociales” de las formas de acción colectiva tradicionales.

Por otro lado, Melucci (2003) destaca un aspecto que hace a la complejidad de las sociedades contemporáneas y de los actores que se configuran en ellas que es el rol preponderante de los medios de comunicación en las disputas por la construcción de significados; en estos nuevos escenarios los medios son actores con intereses específicos involucrados en las tensiones de los campos discursivos y al mismo tiempo un instrumento amplificador a través del cual las disputas cobran dimensiones globales. A su vez, los movimientos sociales perciben la importancia estratégica de posicionarse en el campo comunicativo y participan de esas tensiones desarrollando actividades orientadas a lograr el control y la creación de marcos referenciales propios para la codificación de información. En esta coyuntura Melucci advierte que las experiencias desarrolladas por los movimientos sociales contemporáneos adquieren un carácter alternativo al desafiar la lógica de significación prevaleciente en la sociedad proponiendo nuevos marcos de significados y pautas de relación social, y al otorgar un rol fundamental a las nuevas formas de organizar su acción. La relación entre ambas características es lo que según Melucci distingue a los nuevos movimientos sociales de los partidos políticos: el énfasis puesto en la relación de congruencia entre medios y fines es lo que convierte a la estructura organizativa en un fin en sí mismo “debido a la importancia que

adquieren los procesos de individualización y autorrealización de sus seguidores” (Laraña: 1999: 90). Para la identificación de estos nuevos sujetos nos propone correr el foco hacia los procesos que posibilitan la definición de las identidades de los movimientos sociales; con ese objetivo debemos asumir un cambio metodológico consistente en modificar nuestra percepción sobre los movimientos sociales como unidades empíricas (sustantivas, dadas) desde las que comenzamos nuestros análisis, y pasar a abordarlos como el punto de llegada o el resultado de una serie de procesos: “the empirical unity of a social movement should be considered as a result rather than a starting point” (Melucci: 2003: 43); el desafío sociológico radicaría entonces en estudiar los procesos desarrollados por esos grupos para la construcción de su identidad a través de los cuales los actores negocian, construyen y entienden sus acciones. En este sentido, la construcción de identidad colectiva implica una serie de definiciones cognitivas sobre medios, fines y campo de acción a través de un lenguaje común, una serie de rituales, prácticas y artefactos culturales. De esta manera, los actores configuran un marco cognitivo, no necesariamente homogéneo, en el que se involucran también las emociones de los participantes y a partir del cual el movimiento social desarrolla la capacidad de reconocer su coyuntura específica y las oportunidades de acción que el contexto le permite. Esto nos lleva a preguntarnos nuevamente sobre la posibilidad de establecer relaciones de correspondencia entre las estructuras internas de las organizaciones y la democratización de las instituciones de los sistemas democráticos; es decir: ¿es posible afirmar que las organizaciones que fomentan la participación y el involucramiento de sus miembros en los procesos de toma de decisión internos tenderán a promover estrategias tendientes a democratizar las instituciones y a fomentar valores compatibles con ello? ¿qué construcciones simbólicas sobre la democracia, la representación y la participación política tienden a generar las



organizaciones con estructuras no jerarquizadas? ¿existe diferencia entre los efectos producidos por organizaciones con estructuras no jerarquizadas y los que producen las organizaciones estructuradas jerárquicamente?.

A lo largo de los párrafos precedentes hemos intentado sopesar los aportes y limitaciones de las teorías contemporáneas que abordan los movimientos sociales. Nos encontramos por un lado con explicaciones sobre los modos en que estos actores se relacionan con las instituciones en base a decisiones e intercambios observables entre ambos y por otro, con miradas focalizadas en los procesos internos de las agrupaciones para explicar esa relación.

Si bien nos inclinamos por la estrategia de investigación propuesta por Melucci, no por ello pretendemos impugnar los demás abordajes desarrollados en este capítulo. Creemos que conjugar estos marcos teóricos nos permite determinar si el conjunto de valores, cosmovisiones y explicaciones sobre el rol de la organización, que se promueven entre los miembros de un movimiento, colaboran de alguna forma a modificar el funcionamiento de las instituciones democráticas y la percepción que los sujetos tienen sobre ellas. Asimismo, creemos que si bien es imprescindible abordar esas interacciones, incorporaremos además una dimensión analítica que nos permita examinar los procesos a través de los cuales los movimientos desarrollan sus estrategias y asumen posiciones políticas para acercarnos aún más a nuestro objeto de estudio (los efectos que las organizaciones sociales generan en las instituciones democráticas). Examinaremos a continuación dos modelos explicativos de la relación entre movimientos sociales y procesos democratizadores provistas por Mark Warren (2001), Charles Tilly y Lesley Wood (2010) que si bien no comparten el mismo campo teórico nos proveyeron de reflexiones renovadas sobre las organizaciones de la sociedad civil.

### ***Movimientos sociales y democratización***

Entendemos que existe cierta dificultad a la hora de plantear relaciones causales (positivas o negativas) entre movimientos sociales y democratización debido a una gran cantidad de evidencias empíricas en las que no necesariamente van de la mano y en las que la sucesión entre ambos no se verifica siempre de la misma manera; es por ello que en este capítulo abordaremos dicha cuestión en base a los trabajos de Warren (2001) y Tilly y Wood (2010) que orientaron nuestras observaciones en el trabajo de campo.

En principio acordamos con la afirmación expuesta por Tilly y Wood respecto de la existencia de una correspondencia de tipo incompleta entre instituciones democráticas y movimientos sociales en la que los procesos de democratización (o la democracia) influyen o promueven la aparición y crecimiento de los movimientos sociales y que, bajo ciertas condiciones, se da la relación de manera inversa (Tilly y Wood: 2010). La validez de esta premisa requiere a su vez definir el concepto de “democracia” y “democratización” en términos sociológicos; en tal sentido, teniendo en cuenta que la democracia es un régimen político basado en instituciones específicas y que las instituciones son a su vez relaciones entre los sujetos, Tilly y Wood definen *régimen democrático* como aquellas instancias donde podemos identificar la presencia (en términos relativos) de: a) relaciones regulares y categóricas entre el gobierno y sus gobernados; b) la inclusión de la mayoría o la totalidad de los sujetos en dichas relaciones; c) la igualdad de dichas relaciones para todos los sujetos; d) cambio periódico de los funcionarios gubernamentales para dar respuesta a las consultas colectivas de los súbditos; e) existencia de protecciones que salvaguardan a los súbditos de acciones arbitrarias del gobernante.

Consecuentemente, *la democratización* puede ser entendida como la ampliación de estas relaciones (Tilly y Wood: 2010).

Por otro lado, si bien es posible observar una correspondencia entre el aumento de la capacidad de los sujetos de organizarse en movimientos o asociaciones a medida que se amplían las relaciones democráticas y que a su vez son las agrupaciones las que originan procesos que tienden a “hacer más disponibles” las herramientas de demostración de intereses al presionar sobre las instituciones, el carácter incompleto de esta correspondencia se expresa en que un número importante de los procesos que acarrearán la democratización también fomentan el desarrollo de los movimientos sociales. ¿Cómo diferenciar causa y efecto? ¿Qué es lo que produce la democratización?. Según la mirada de los autores es posible distinguir entre procesos democratizadores *per sé* (observables en sociedades no democráticas que se activan por cambios estructurales no necesariamente provocados por movimientos sociales) y las capacidades de los movimientos sociales de promover esos procesos bajo condiciones específicas, es decir, en aquellos regímenes que han creado un gobierno directo, relativamente eficaz, con una administración central (no controlada por segmentos comunales o intermediarios privilegiados) y que cuentan con un mínimo de democracia. Esta distinción se sostiene en un trabajo empírico extenso sobre el desarrollo histórico de los movimientos sociales realizado por los autores a partir del cual observan que el uso de instituciones representativas por parte de los gobiernos para ejercer el poder dió lugar a la aparición de instancias de negociación con agrupaciones civiles para la obtención de apoyos sobre determinadas políticas. Luego, a medida que los ciudadanos entendieron la capacidad de los movimientos sociales para viabilizar demandas, se establecieron prácticas y contactos que activaron procesos de democratización (Tilly y Wood:

2010). Los tres procesos democratizadores que los autores atribuyen a la dinámica interna de los movimientos sociales son la ampliación directa de participantes en la arena política, la posibilidad de evitar que se plasmen las desigualdades sociales en la política pública y la promoción de redes de confianza entre los ciudadanos y los principales actores políticos. Siguiendo este razonamiento los indicadores de dichos procesos serían la existencia de coaliciones que trasciendan los grupos sociales predominantes en la arena política; la presencia de intermediarios especializados en la articulación de coaliciones formados por los movimientos y, la incorporación de sectores sociales a la arena política que no se habían movilizado antes (Tilly y Wood: 2010).

Si bien esta distinción nos permite identificar los modos que adquiere la interacción entre movimientos sociales e instituciones, o los efectos democratizadores atribuibles al accionar político de dichos movimientos; teniendo en cuenta la observación de condiciones de posibilidad necesarias para que las acciones de los movimientos sociales tengan algún efecto sobre las relaciones institucionales existentes y que las acciones de los movimientos sociales por su dinámica de agregación y organización para la visibilización de demandas logran (aún sin proponérselo de manera explícita) democratizar las instituciones, nos preguntamos si es posible identificar características distintivas entre los movimientos sociales que nos permitan inferir si sus actividades políticas colaborarán o no (son más propensas o no) a ampliar esas relaciones democráticas.

Por otro lado, en su trabajo *“Democracy and Associations”*, M. Warren (2001) retoma las discusiones en torno a las limitaciones del Estado y el Mercado como articuladores sociales y propone correr el foco de investigación hacia la vida asociativa para entender cómo los cambios

sociales y políticos que ha atravesado la democracia han promovido que las asociaciones adquieran un nuevo y marcado protagonismo a punto tal que pueden ser entendidas como “nuevas formas de representación, de organización de la acción colectiva y como promotoras de formas alternativas de gobernanza” (Warren: 2001: 03)<sup>8</sup>. Asimismo, sobre la relación de las asociaciones con el sistema democrático afirma que “una vida asociativa robusta promoverá más democracia en cada vez más ámbitos de la vida, al tiempo que forma y profundiza las capacidades y disposiciones de la ciudadanía democrática” (Warren: 2001: 61)<sup>9</sup>. Con el fin de constatar esta afirmación, Warren propone un estudio sobre los efectos de las asociaciones en el sistema democrático y diseña categorías de análisis para ello. Resumiremos brevemente algunos conceptos normativos de su trabajo para pasar luego a su caracterización de los posibles efectos de las asociaciones sobre la democracia.

El autor define “democracia” como “el autogobierno colectivo bajo condiciones que proveen a los ciudadanos posibilidades relativamente iguales de influir en los sentidos y decisiones colectivas”<sup>10</sup> (Warren: 2001: 61). Asimismo, la noción de autogobierno democrático supone dos “ideales”: igualdad en la distribución del poder para tomar decisiones colectivas e igualdad de participación en la creación de *collective judgments* (sentidos colectivos). A su vez, la participación en la creación de *sentidos colectivos* tiene dos significados diferentes pero complementarios entre sí: por un lado la democracia implica procesos de comunicación por medio de los cuales los *individuos* determinan sus creencias y preferencias sin ser objeto de

---

<sup>8</sup> Del original en inglés; la traducción es nuestra.

<sup>9</sup> Del original en inglés; la traducción es nuestra.

<sup>10</sup> Del original en inglés; la traducción es nuestra.

coacción o manipulación y, a su vez, supone procesos comunicativos por medio de los cuales un *colectivo* determina sus creencias y preferencias; éstas contribuyen luego a que el grupo formule una “voluntad colectiva” u “opinión pública”. De manera que debemos entender que la democracia involucra procesos y protecciones institucionalizados que dan lugar o habilitan la expresión, manifestación y discusión a través de las cuales los individuos determinan sus creencias y preferencias tanto individual como colectivamente (Warren: 2001). Ambos significados dependen del modo en que las instituciones democráticas distribuyen el poder en la medida en que eso afecta directamente las posibilidades de los sujetos de participar en la construcción de sentidos y en las decisiones públicas. Finalmente, la perspectiva teórica de Warren derivará de dos dimensiones de la democracia que él mismo resume en los siguientes postulados: “una democracia es buena porque promueve el autogobierno colectivo y un sistema político es más democrático en la medida en que sus instituciones promueven el autogobierno individual y garantizan de manera igualitaria las posibilidades de los individuos de incidir en la construcción de sentidos y decisiones colectivas”<sup>11</sup> (Warren: 2001: 61).

Una diferencia de particular importancia que éstas definiciones de democracia y democratización presentan en relación con las de Tilly y Wood (2010) es que en este segundo caso se contemplan como objeto de análisis los procesos de creación de sentidos asociados a la capacidad de los sujetos (individuales y colectivos) de auto-gobernarse. El auto-gobierno implica dentro de este universo teórico la “ausencia de coacción o manipulación para la formulación de creencias y preferencias” o, dicho de otra manera, la observación de cierto grado de fluidez de los procesos de comunicación por medio de los cuales los ciudadanos puedan elaborar sentidos y

---

<sup>11</sup> Del original en inglés; la traducción es nuestra.

preferencias libremente. Incorporar como elemento de observación los procesos comunicativos que las instituciones democráticas garantizan, resulta un aporte novedoso y fructífero para pensar la relación entre los movimientos sociales y el sistema democrático ya que nos permite dar forma y valor a los aspectos cualitativos de los intercambios que ocurren en esa relación. Por otro lado, si asumimos junto con Warren que un factor determinante en estos procesos es la distribución - institucional- del poder, es decir que el diseño institucional del sistema político favorece en mayor o menor medida la posibilidad de los sujetos de participar en la construcción de sentidos colectivos, nos preguntamos si la misma premisa puede aplicarse a una escala más reducida como lo son los movimientos sociales, es decir, si la forma que adquieren los procesos comunicativos al interior de estas organizaciones influyen en la construcción de vínculos y contactos que éstas hacen como sujeto colectivo con las instituciones públicas u otras agrupaciones. Es en este sentido que creemos que las organizaciones tendientes a generar espacios participativos e inclusivos tienden a proyectar valores y generar estrategias que promueven la equiparación de las relaciones de poder institucional entre distintos sectores sociales y la ampliación de los participantes en la arena política.

Hemos intentado mostrar la complementariedad de los modelos teóricos expuestos en este capítulo a partir de los cuales hemos construido nuestro objeto de estudio. No nos interesa refutar ni poner a prueba las conclusiones de dichos autores sino examinar al FPDS y su relación con las instituciones democráticas haciendo uso de las herramientas teóricas expuestas. En tal sentido nos pareció interesante recoger la mirada de sus protagonistas porque creemos que es en sus relatos, prácticas y visiones de lo social y lo político donde se evidencian varios “efectos”, *huellas*, que la experiencia de “lo colectivo” imprime en los sujetos y las instituciones

en relación con ellos.

Nos valdremos de la tipología propuesta por Warren para observar tres formas en que las asociaciones pueden contribuir positivamente a la ampliación de las relaciones democráticas en que los sujetos se encuentran insertos y en base a las cuales deben diseñar sus estrategias de acción; entendiendo como “incidencia positiva” por un lado la contribución de la organización a mejorar las capacidades de los sujetos de elaborar, deliberar y expresar sus preferencias y creencias libremente, la posibilidad concreta de lograr la visibilización de sus demandas por parte de las instituciones estatales locales y de incidir en la percepción que otros tienen sobre la organización. A continuación resumiremos brevemente las categorías de análisis utilizadas y los indicadores seleccionados para cada una de ellas:

- ***Efectos de desarrollo (Developmental effects)***: las asociaciones pueden contribuir a formar, mejorar y respaldar las capacidades de los ciudadanos de participar en la vida pública mediante la promoción de la participación en procesos de toma de decisión colectiva y promoviendo espacios que faciliten la formación de juicios autónomos que reflejen sus deseos y preferencias.

*Indicadores*: nos concentraremos en los elementos señalados por los entrevistados como aprendizajes obtenidos al interior de la organización y en la existencia de restricciones para la participación en la toma de decisiones.

- ***Efectos en la esfera pública (Public Spheres Effects)***: las asociaciones pueden contribuir a la formación de opinión pública, proveer infraestructuras sociales para el desarrollo de agendas, ideas, deliberaciones y una voz propia.

*Indicadores*: aquí optamos por la observación de demandas o propuestas instaladas en las



agendas de los gobiernos local o nacional y el modo en que los integrantes del FPDS son percibidos por terceros (medios de comunicación, vecinos del barrio, amigos y familiares de los militantes no pertenecientes a la organización).

- ***Efectos institucionales (Institutional Effects)***: se refiere a los efectos que las asociaciones tienen sobre las instituciones a través de las cuales se toman decisiones y organizan las acciones colectivas. Es decir, las contribuciones de las asociaciones al funcionamiento democrático de las instituciones como el parlamento, unidades administrativas locales, estructuras federales, etc. El autor identifica cinco tipos de efectos institucionales: representación, resistencia, subsidiariedad, cooperación y coordinación y legitimidad democrática.

*Indicadores*: en este caso hemos elegido indicadores para cada uno de los cinco tipos de efectos institucionales. Hemos observado la existencia de canales de comunicación al interior de la organización que permitan la circulación (y discusión) de intereses y preferencias entre sus miembros y quienes asumen la representación de la organización; formas de participación del movimiento en actividades organizadas por instituciones públicas; reformulación de políticas públicas impugnadas por la organización; conocimiento y utilización de mecanismos formales para elevar demandas a instituciones públicas.

### **Capítulo III**

#### **Antecedentes del FPDS. Reconstrucción del movimiento piquetero**

Desde la II Guerra Mundial, los debates académicos en torno al rol del Estado moderno han oscilado entre las teorías estado-céntricas y mercado-céntricas<sup>12</sup> aunque existe un amplio acuerdo en que durante la última década hemos asistido a una recomposición del rol estatal (Migdal: 1994; Offe 1992; Evans:1996; Acuña et. al: 2002). La complejidad de los cambios acaecidos requieren de una aproximación que permita integrar ambos enfoques y que evite concebir los extremos de esta relación como entidades homogéneas y libres de contradicciones internas (Migdal: 1994). Esta mirada resulta interesante ya que dimensiona las modificaciones recíprocas que surgen de la interacción entre Estado y movimientos sociales en el proceso de reforma estatal que dio lugar al surgimiento de los movimientos de trabajadores desocupados.

Las primeras críticas que facilitaron las propuestas de reforma estructural neoliberal comenzaron a emerger luego de la crisis internacional del petróleo de 1973. Durante la década del ochenta los países latinoamericanos entraron en procesos recesivos que trasladaron el foco político de la “cuestión del desarrollo” a la de “la estabilidad”. Durante la década siguiente el proceso de estabilización operado en América Latina supuso la nacionalización de las deudas privadas, devaluación monetaria y el endeudamiento externo para la obtención de recursos. Esto impactó negativamente en la capacidad de los Estados de influir en la economía doméstica y en la implementación de políticas sociales. Los ideales de libre mercado y las recetas emanadas del Consenso de Washington se convirtieron en el paradigma dominante de la política económica proveyendo legitimidad a las reformas de reestructuración del Estado. Para una comprensión

---

<sup>12</sup> “Mercado-céntrico” en se refiere en este caso a las teorías cuyo énfasis explicativo descansa en el ámbito privado de la sociedad civil en contraposición al Estado como explicación última de la articulación de las relaciones sociales y de poder.

más acabada de los orígenes del FPDS reconstruiremos el surgimiento del movimiento de trabajadores desocupados y algunos aspectos de las reformas estructurales aplicadas al estado argentino que se constituyen en lo que Migdal (1994) denomina múltiples arenas sociales de dominación y oposición en las que necesariamente interactúan piezas fundamentales del Estado y la sociedad.

### ***Las reformas neoliberales. Argentina 1970 - 1990***

El modelo organizativo que operó en la economía Argentina luego de la gran depresión se basó en lo que Marcelo Cavarozzi (1991) ha denominado “matriz estadocéntrica” (MEC). El funcionamiento de la MEC se fundamentaba en dos pares de procesos o mecanismos: la relación entre el mercado y el Estado y la relación entre el Estado y la sociedad. En el primer proceso los mercados nacionales adquirieron un dinamismo tal que la intervención del gobierno se volvió necesaria para organizar la creciente complejidad de la economía; de esta manera, "la regulación política de la economía, y más concretamente de los flujos de capital, se convirtió en funcional para el crecimiento” (Cavarozzi: 1991: 95). El segundo proceso se refiere a la activación política de la sociedad y la creación de formas de movimientos sociales cuya participación es “balanceada” desde el Estado. El autor presenta un entramado institucional que incluye patrones clientelistas y canales corporativistas asociados con agencias estatales, partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales. A su vez, la relación entre el Estado y la sociedad es condicionada por la evolución de mecanismos de control estatal de manera tal que el tipo de régimen y las instituciones democráticas tienen un impacto directo en la relación mencionada (Cavarozzi: 1991).

La consolidación de la MEC configuró una suerte de pacto tácito entre capital y trabajo en el que el Estado asumió un rol mediador para la resolución de tensiones entre las elites políticas y los nuevos actores sociales de la sociedad argentina. Las décadas subsiguientes estuvieron marcadas por las crecientes tensiones entre distintos sectores sociales y grupos económicos hasta que a mediados de los setenta con el advenimiento del último golpe de estado comienzan a implementarse procesos de reforma estructural de corte neoliberal como el congelamiento de los salarios, la eliminación de los controles de precios, devaluación de la moneda, desregulación del mercado financiero y el disciplinamiento de la mano de obra organizada a través de la violencia y el terror. Esto provocó el aumento del desempleo y la concentración de los medios de producción de distintos sectores en grupos reducidos de la economía.

El retorno democrático argentino presentó un escenario polarizado y de gran inestabilidad política y económica. El diagnóstico económico inicial del gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) elaboró como respuesta un proyecto neokeynesiano, en el que el Estado cumpliría un rol organizador de los actores sociales pero las políticas implementadas resultaron ineficientes e incapaces de alcanzar negociaciones con sindicatos e inversores, obligando al gobierno a redefinir sus políticas económicas. En 1985 el poder ejecutivo anunció una serie de medidas que apuntaban a la reasignación de recursos y a la constitución de un nuevo set de reglas para el largo plazo. Las políticas liberales comenzaban a asomarse a escena.

El plan de estabilización (“Plan Austral”) promovió una fuerte devaluación de la moneda, reducción de salarios, y elevación de las tasas de interés. El programa tenía dos tipos de políticas: medidas orientadas a la liberalización de los mercados y una serie de proyectos dirigidos a la

privatización parcial de empresas públicas que requerían la intervención del Congreso para su venta<sup>13</sup>. El primer set de reformas fue alcanzado por medio de concesiones al sector industrial, mientras que las segundas fueron resistidas en el Congreso por el Partido Justicialista (con una nueva mayoría obtenida en el Parlamento en las elecciones legislativas de 1987) que bloqueó la iniciativa del Poder Ejecutivo de privatizar dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas (la compañía aérea pública) y ENTEL, la empresa nacional de servicios de comunicación. La privatización fue un tema de gran sensibilidad que incluso generó que algunos miembros de la UCR se unieran al PJ, con el argumento de que los programas de privatización estaban en contra de los principios del partido.

La crisis hiperinflacionaria en 1989 precipitó la resignación de Alfonsín seis meses antes del término de su mandato en la figura del presidente Carlos Menem quien una vez en el poder, abandonó el programa populista de su campaña electoral en favor de uno de corte liberal ortodoxo. Algunos factores que permiten explicar la capacidad del nuevo gobierno de implementar reformas impopulares fueron la existencia de un contexto adverso y el cambio de alianzas políticas que operó el entonces presidente; en tal sentido la crisis económica fue uno de los componentes principales del contexto nacional argentino que permitió legitimar frente a la opinión pública la implementación de las reformas. Por otro lado el nuevo proyecto económico “exigió un cambio fundamental en las alianzas políticas del Partido Justicialista (PJ), que dejó de

---

<sup>13</sup> Entre las medidas podemos citar también el lanzamiento del Plan Houston, dirigido a la explotación de hidrocarburos. El plan fue aprobado por el decreto 1443/85 y abrió a licitación de capitales privados la explotación de 1,3 millones de kilómetros cuadrados de tierras continentales y marítimas que serían entregadas en concesión durante un período de 30 años. Si bien la medida anunciaba la búsqueda de inversores extranjeros para sanear el enorme déficit que la empresa presentaba en ese momento, la consecuencia final fue una pérdida de áreas que YPF ya había comenzado a explotar y la ausencia de inversiones por parte de las compañías extranjeras que adquirieron las concesiones. Como resultado, las reservas petroleras de YPF entre 1983 y 1987 cayeron un 8 % y la producción de petróleo un 13 % (Gadano: 1998).

apoyarse masivamente en el actor corporativo sindical como lo hiciera tradicionalmente, para acercarse al corporativismo patronal representado por ciertos grupos oligopólicos y cartelizados de la economía argentina” (Svampa y Preyera: 2009). ¿Cómo fue posible este audaz cambio de alianzas?; la capacidad de maniobra del entonces presidente se explica en parte en que luego de la derrota electoral de 1983 el Partido Justicialista comenzó un proceso de revisión y crítica interna que lo dividió en dos fracciones opuestas: los “renovadores” y los “ortodoxos”. El planteo del gobernador riojano bregaba por el fin de las diferencias entre peronistas “ortodoxos” y peronistas “renovadores” fundando su propia identidad en la inexistencia de dicha diferencia. La autocrítica y la revisión eran, de esta manera, pasadas por alto. Esto le permitió a Menem abandonar los objetivos programáticos de su partido sin perder su apoyo ni comprometer la gobernabilidad. La coalición dentro del partido que inclinó las internas para las elecciones presidenciales de 1989 a favor de Menem, nucleaba a todos los sectores del peronismo que habían sido desplazados del proceso renovador. Una vez en el cargo el presidente desplegó una estrategia que implicó la asociación de la administración de Alfonsín con el episodio de la hiperinflación -explotando el recuerdo de esa situación extrema firmemente instalada en la memoria de la gente- y barrió las demandas populistas tradicionales del partido y las promesas electorales de "justicia social" privilegiando la estabilidad económica sobre cualquier otra cosa. A pesar de que algunos sindicatos y grupos políticos presionaron contra los programas de gobierno, la mayoría dentro del PJ no era capaz de correr el riesgo de perder el acceso a los recursos estatales; Menem explotó las diferencias internas aplicando recompensas y castigos de forma selectiva para mantener la coalición de gobierno, el control institucional y el apoyo de poderosos sectores económicos.

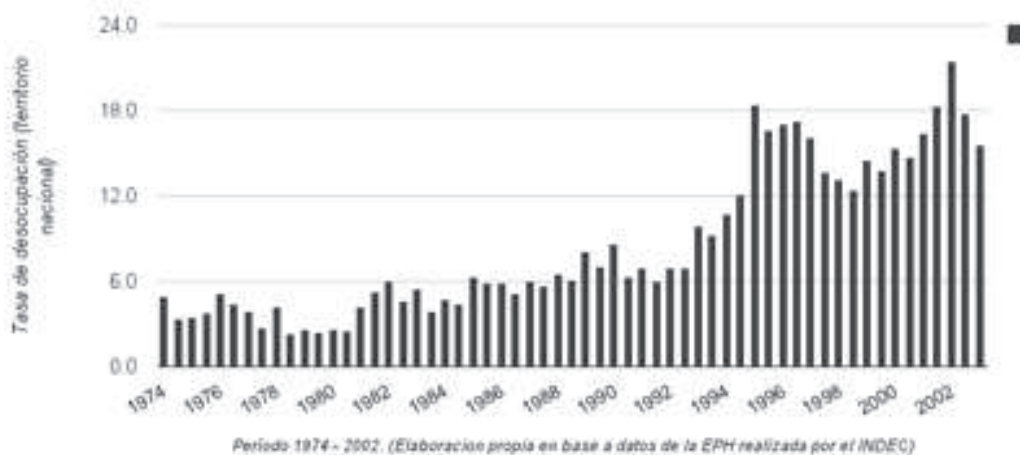
Esta reconfiguración política generó desplazamientos en el sector sindical que quedó dividido en tres grandes grupos: el de la CGT oficial agrupada en la figura de Rodolfo Daer -que acompañó al gobierno en las reformas e incluía un amplio arco de gremios-; la CGT disidente liderada por Hugo Moyano que se pronunciaba esporádicamente contra las políticas del gobierno; y una tercera agrupación, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Germán Abdala y Víctor De Gennaro, que rechazó las reformas desde su inicio y se proponía implementar una nueva forma de organización sindical desligada de las estructuras partidarias y de corte independiente. Esto muestra como el giro neoliberal del Partido Justicialista abrió un espacio para nuevas formas de organización sindical, incluso una ligada a tradiciones clasistas como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) vinculada al Partido Comunista Revolucionario (PCR) cuya identidad creció durante las experiencias de resistencia de los trabajadores municipales de Jujuy bajo la conducción de Carlos “Perro” Santillán. Tanto la CTA como la CCC tendrán un rol determinante en la formación de los movimientos de trabajadores desocupados (Svampa y Pereyra: 2009).

### ***Las reformas y el surgimiento del movimiento piquetero (1990-2002)***

Las modificaciones introducidas durante los noventa se enmarcan en las llamadas reformas de segunda generación recomendadas por los organismos internacionales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Las reformas se orientaron a redefinir las regulaciones sociales vigentes con el fin de profundizar el modelo de liberalización de los mercados adoptando las características de lo que Pierson (1994) denomina “recortes de tipo sistémico” tendientes a introducir modificaciones estructurales. El objetivo central del

gobierno era la flexibilización laboral y el achicamiento del gasto fiscal. Con esto en mente debía recortar el presupuesto de los servicios públicos (salud, educación y seguridad social) y debilitar el poder de los sindicatos que verían los intereses de sus bases afectados fundamentalmente por la primera medida. Para ello, los reformadores establecieron como táctica el cambio de la opinión pública sobre la capacidad del Estado de garantizar esos servicios y la descentralización de competencias administrativas sobre los servicios sociales a los niveles provincial y municipal, la supresión de los principales mecanismos de control estatal sobre el mercado, el establecimiento de un tipo de cambio fijo y la reducción de barreras aduaneras a productos del exterior. En relación al mercado de trabajo la Ley Nacional de Empleo (24.013) sancionada en 1991 tuvo un impacto directo sobre el sector asalariado, al modificar las condiciones de contratación en favor de los empleadores por medio de la extensión de la jornada laboral, la introducción de la modalidad del “período de prueba” y la disminución de los aportes patronales (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución de la Tasa de Desempleo a nivel nacional 1974-2002





También fueron afectados por la reforma el sistema de jubilaciones que pasó de un régimen de tipo solidario a otro de capitalizaciones individual cuyo mercado lo componían empresas privadas, y el sistema de obras sociales. La consecuencia de estos acelerados procesos de reforma fue el empobrecimiento de la sociedad argentina reflejado en la caída del salario y el aumento de la desigualdad. (Ver Gráfico 2 sobre la evolución del coeficiente de GINI entre 1974 y 2010).

Gráfico 2. Evolución del coeficiente de GINI - Argentina 1974- 2010



Fuente: *Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean* (CEDLAS and The World Bank)

Estas son las condiciones objetivas en que surgen los movimientos de trabajadores desocupados, también denominados “piqueteros” a raíz del método implementado por estas agrupaciones para articular demandas, consistente en impedir la circulación de vehículos por rutas o trabar el acceso a determinados espacios estratégicos. Svampa y Pereyra han realizado un trabajo minucioso sobre el surgimiento de este grupo social proporcionando una genealogía sobre el mismo. Recogeremos en este apartado algunas de las características mencionadas en ese trabajo que nos permitan delimitar nuestro caso de estudio. En tal sentido los autores han

identificado dos “afluentes fundamentales” de los movimientos piqueteros que definieron su identidad: “por un lado reenvía a las acciones disruptivas, evanescentes y por momentos unificadoras de los piquetes y puebladas del interior (...), por otro lado remite a la acción territorial y organizativa gestada en el conurbano bonaerense y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular” (Svampa y Pereyra: 2009: 19). El primero de estos elementos se explica en parte como el correlato social de los cambios económicos de los noventa en torno a la liberalización de los mercados y la privatización acelerada de empresas estatales que impactaron profundamente en el tejido social y económico de ciudades y pueblos del interior del país. La privatización de YPF es señalada como un caso paradigmático de este proceso en el que muchas localidades se convirtieron en pueblos fantasmas después de su cierre.

El segundo elemento se liga al proceso de desindustrialización y empobrecimiento de las clases populares cuyos comienzos remiten a la década del setenta y las transformaciones estructurales que desarrollamos en el apartado anterior. Si bien a comienzos de los noventa se habían registrado movilizaciones esporádicas en las que se cuestionaban las políticas descriptas, la articulación de las reivindicaciones y su visibilización a nivel nacional no se logró hasta 1996 y 1997 con los cortes de ruta y puebladas de Cutral-Có, Plaza Huinul, Gral. Mosconi y Tartagal. La estrategia del corte o “piquete” aparece allí como una herramienta de lucha original y como la expresión de una situación de desesperación en la que sólo queda el recurso de la exposición del propio cuerpo para elevar los reclamos en contra de las privatizaciones de las empresas del estado, los despidos y la obtención de un espacio de negociación. Las experiencias de Neuquén y Salta marcaron hitos en la historia de estas movilizaciones que agruparon distintos sectores

sociales -cuyo rasgo común era el haber sido afectados por las políticas neoliberales del período y sus fuertes procesos de descolectivización- (Svampa y Pereyra: 2009).

La visibilidad que fueron ganando los conflictos disipó los efectos de dispersión que la descentralización administrativa (incluida dentro de los paquetes de reformas) había generado durante las primeras manifestaciones y el problema de la desocupación y el deterioro social comenzaron a ser entendidos como una responsabilidad del Estado y a horadar la legitimidad de las privatizaciones. A su vez, la participación de la CTA (que agrupaba gremios docentes y de empleados estatales) y la CCC en los piquetes otorgó una dimensión mayor al “problema de los cortes” (Svampa y Pereyra: 2009). La resistencia ofrecida por los participantes de estas manifestaciones a las acciones represivas oficiales y la participación transversal de los integrantes de las comunidades sublevadas evidenciaban de alguna manera la necesidad de adoptar medidas alternativas a la represión, lo que dió lugar a la creación de subsidios en la forma del programa gubernamental “Plan Trabajar”.

Asimismo, en el conurbano bonaerense comenzaba a articularse el mencionado eje territorial del movimiento piquetero, fuertemente ligado a las tomas ilegales de tierra y a la interacción de actores multisectoriales cuyo espacio de acción eran los barrios y las necesidades concretas que a nivel local se iban articulando en demandas que incluían desde el reclamo por bajas en las tarifas de servicios básicos hasta alternativas para paliar el hambre. De esta manera sociedades de fomento, organizaciones clericales, clubes sociales, comedores barriales, roperos comunitarios, etc., comenzaron a articularse para resolver problemas específicos del territorio allí donde la autoridad estatal se había retirado o donde la calidad de los servicios públicos básicos se había deteriorado. “Las organizaciones de desocupados que van a ilustrar cabalmente el modelo

territorial son la FTV, la CCC, el MTR y la Coordinadora de Trabajadores desocupados Aníbal Verón (CDT-AV)” (Svampa y Pereyra: 2009: 39); el FPDS se desprenderá de MTDs agrupados en esta última coordinadora.

El grado de pauperización de los sectores populares explica en principio que las primeras movilizaciones y reclamos se hayan hecho en torno a demandas sobre necesidades básicas, pero también permite entender la reinscripción de las clases populares en la escena política. A su vez, la confluencia y articulación entre actores diversos da cuenta de la emergencia de un nuevo sujeto social de carácter multisectorial en los MTD tal como lo expresa uno de sus integrantes: “Si [uno] llega a alguno de los locales del MTD de zona Sur, va a internarse en un hormiguero donde distintos grupos se entrecruzan discutiendo temas tan dispares como el último corte por los planes, una jornada de cine insurgente, las dificultades de los proyectos productivos, el problema de la propagación del SIDA, el debate planteado en la asamblea de uno de los barrios, inconvenientes surgidos en algunas de las distintas capacitaciones, el problema de la salud reproductiva, una charla sobre la década del setenta y otra sobre el funcionamiento de la biblioteca” (Cieza: 2004: 60).

Si bien Svampa y Pereyra (2009) atribuyen la integración de clases medias y populares al grado de pauperización de las primeras, en un trabajo posterior Melina Vázquez (2012) sugiere como factor explicativo de esta tendencia las “trayectorias de militancia previa” de quienes pasaron eventualmente a integrar y liderar los MTD que forman parte del FPDS. La autora afirma también que la distancia entre las trayectorias de vida de estos referentes difieren de las de quienes componen las bases del movimiento poniendo en juego una “ética militante que exalta el valor de vivir igual y en el mismo lugar que los compañeros, es decir, en el barrio” (Vázquez:

2012: 57). Vemos entonces como el territorio adquiere un carácter central que en el caso de organizaciones como el FPDS se liga al nivel de compromiso asumido por sus militantes<sup>14</sup>.

### ***Crisis de los movimientos de trabajadores desocupados***

Las organizaciones sociales que lograron visibilidad a mediados de los noventa, alcanzaron en el año 2002 un alto grado de organización y coordinación a nivel nacional al llegar el fin de siglo. La capacidad de movilización de las organizaciones mostró un aumento significativo entre los años 2000 y 2002, en el que se observa un incremento exponencial de los cortes de ruta durante ese breve período que registró para el año 2002 la cifra 2.336 cortes de ruta (Ver Gráfico 3).

Hacia fines de 2000 la intransigencia y masividad de los cortes habían generado una situación de debilidad en el nuevo gobierno nacional<sup>15</sup> que tras algunos intentos de descentralizar los conflictos apelando a las gobernaciones provinciales para su negociación<sup>16</sup>, acabó asumiendo una postura más rígida en el 2001. A comienzos de ese año el Ministerio de Trabajo dispuso un

---

<sup>14</sup> La trayectoria de Darío Santillán es un caso (entre muchos), de militantes barriales que se integraron geográficamente a sus espacios de militancia. A fines de los noventa Darío participó de una toma de tierras en el barrio La Fe, donde iba a construir su propia casa junto con los ocupantes del lugar. Parte del proceso está registrado en el film “La dignidad rebelde” de Miguel Mirra. Disponible en [https://www.youtube.com/watch?v=Xm4rG\\_XTc0](https://www.youtube.com/watch?v=Xm4rG_XTc0).

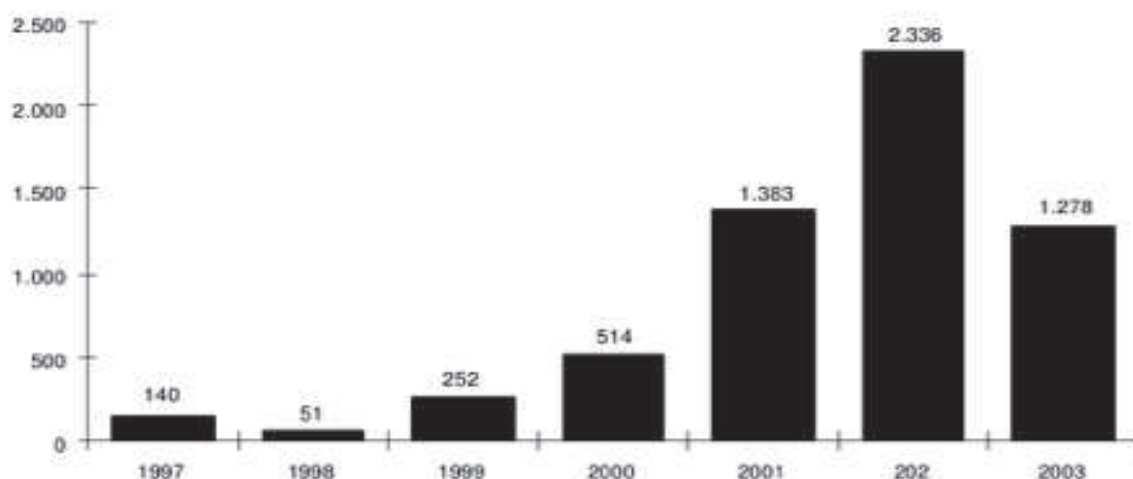
Por otro lado, resulta interesante plantear un posible paralelismo entre los procesos de territorialización que asumen los militantes de las organizaciones de desocupados y los de “proletarización” de las organizaciones de izquierda del setenta. Salvando algunas distancias es posible identificar en ambas estrategias la formación político-ideológica en base a la inmersión en el trabajo y las formas de vida de las clases populares para la elaboración de horizontes políticos compartidos.

<sup>15</sup> En 1999 resultó electo presidente Fernando De la Rúa encabezando una coalición política entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (FREPASO) denominada “Alianza”.

<sup>16</sup> Una de las situaciones de mayor tensión entre gobierno y movimiento piquetero, se dió a fines del año 2000 a raíz del asesinato de Anibal Verón (uno de los manifestantes) durante la represión del corte de la ruta N° 34 en Salta. El hecho desató una nueva peplada en el norte de la provincia, obligando al gobierno nacional a intervenir en la negociación.

reempadronamiento de los inscriptos en los planes trabajar con el objetivo de “depurar” los padrones de “militantes políticos” (Svampa y Pereyra: 2009) y reducir la cantidad de subsidios.

Gráfico 3. Evolución Anual de Cortes de Ruta, 1997, 2002



Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría (Cerrutti y Grimson: 2004)

A pesar de las estrategias desplegadas por el gobierno para desarticular las organizaciones, los cortes siguieron y ganaron cada vez más el apoyo de la opinión pública lo que presentaba dificultades para legitimar la represión de las organizaciones. La capacidad de presión del movimiento había aumentado en parte gracias a la modificación introducida por el gobierno de la Alianza al Plan Trabajar (ahora en su tercera versión: “Plan Trabajar III”) que posibilitaba que fueran las mismas organizaciones las que gestionaran los planes. Los MTDs se adaptaron rápidamente a esta nueva coyuntura constituyendo ONGs para la obtención de planes dando oportunidad a las organizaciones más pequeñas y “autónomas”<sup>17</sup> de crecer multiplicando

<sup>17</sup> Utilizamos este adjetivo siguiendo la clasificación propuesta por Svampa y Pereyra (2004) que agrupa las organizaciones piqueteras en tres grandes grupos: las institucionalizadas (FTV y CCC), las vinculadas a los partidos de izquierda (Bloque Nacional Piquetero) y las autónomas (CTD-AV y MTR).

sus beneficiarios. La medida estaba orientada a la eliminación del aparato punteril de la provincia de Buenos Aires ligado al Partido Justicialista (Svampa y Pereyra: 2009). A su vez, en el marco de la aplicación de las medidas de ajuste, el gobierno de la Alianza disminuyó la cantidad de planes, lo que explica en gran medida junto con la nueva capacidad material de las organizaciones el continuo aumento de los cortes durante el período 2000-2002; también puede argumentarse sobre este incremento de manifestaciones que el cambio de gobierno en el 2000 fue leído por las organizaciones como una modificación en las estructura de oportunidades políticas para generar mayor presión (Svampa y Pereyra: 2009; Cerrutit y Grimsom: 2004).

A mediados de 2001 se realiza la primera Asamblea Nacional Piquetera en la provincia de Buenos Aires a la que asistieron unas 2000 personas (Oviedo: 2001) con el objetivo de discutir estrategias comunes frente a los ajustes que prometían la política de “déficit cero” y la ley de ajuste anunciada por el gobierno. “La Asamblea aprobó, por unanimidad, un plano de lucha nacional cuyo método de conquista serían los cortes de ruta progresivos, con el objetivo de anular la ley de ajuste, liberar a los presos políticos y poner fin a los procesos judiciales contra los militantes. Los estudiantes, los trabajadores de Aerolíneas, jubilados y todos los demás afectados por las políticas neoliberales, fueron convocados a unirse a la lucha. El encuentro también aprobó la creación de una coordinación nacional y de distrito” (Oviedo: 2001). A pesar del acuerdo, durante la Asamblea comenzaron a aparecer diferencias entre las organizaciones que si bien tenían objetivos compartidos, no estaban unificadas desde lo ideológico y a la postre mostraban notables diferencias en cuanto a su capacidad de movilización. Los debates en torno a la intransigencia de los cortes y la utilización o no de palos y capuchas durante esas medidas marcaron puntos de tensión entre los bloques organizadores de la asamblea (FTV y CCC) y la

Coordinadora Sur en la que se agrupaban los MTDs de la zona sur del gran Buenos Aires y el Movimiento Teresa Rodríguez<sup>18</sup> (Svampa y Pereyra: 2009). Otro punto de tensión lo generó el proyecto presentado por la CTA en la I Asamblea que buscaba enmarcar el movimiento piquetero en un marco político más amplio con el objetivo de presentar una alternativa de gobierno que se expresaría en el “Frente Nacional de la Pobreza” (FNP). Aún cuando el vocero de la CTA, Víctor De Gennaro, había sido bien recibido por la Asamblea, varios grupos piqueteros comenzaban a ver con suspicacia a la organización sindical que “a espaldas de los piqueteros decidió convertir el acto en Plaza de Mayo con que debía concluir la jornada de corte de treinta y seis horas en el acto de lanzamiento del “Frente Nacional de la Pobreza”<sup>19</sup> (Oviedo: 2001: 120).

Durante los cortes que siguieron a la I Asamblea, las diferencias mencionadas entre las organizaciones se fueron agudizando sobre todo por la posición adoptada por el principal referente de la FTV, Luís D’Elía, quien llegaría a acusar a las agrupaciones de la Coordinadora

---

<sup>18</sup> El MTR es de orientación guevarista y tiene su origen en los mismos MTDs que el FPDS: Florencia Varela, San Francisco Solano, Hurlingham y Mar del Plata. (Svampa y Pereyra: 2009).

<sup>19</sup> En una nota de *Prensa Obrera* del 26 de septiembre de 2001, Gabriel Solano denunciaba lo siguiente: “El 21 de septiembre se realizó la movilización del Frente de la Pobreza de la CTA, apoyado por la CCC. La marcha reunió a escasas 7 mil personas. La columna de La Matanza, siempre la más numerosa, esta vez fue muy reducida. Una pequeña columna de IU, integrante del Frente de la Pobreza, cerraba la caravana. Para ese día, sin embargo, la Segunda Asamblea Nacional Piquetera de La Matanza había votado otra cosa: una movilización nacional piquetera por la derogación del ajuste, la Ley de Déficit Cero y la libertad de todos los luchadores detenidos. El plan de lucha se debía desarrollar con cortes de 36 horas desde el jueves 20 en todo el país, los que fueron boicoteados por la CTA. La movilización de la Asamblea Piquetera debía ser completamente independiente. Debido a la violación y el basteo de las resoluciones de la Asamblea Piquetera el Polo Obrero resolvió no concurrir a la movilización. Tampoco estuvieron el MTD-Aníbal Verón, el MTR de Martino y el movimiento de Castells”. La nota hace referencia también a la presentación por parte de diputados del ARI y el PO en la Asamblea de un llamado a plebiscitar un seguro de desempleo y programas para Jefes y Jefas de hogar: “Estos mismos diputados, con la Carrió a la cabeza, estuvieron en la conferencia de prensa de lanzamiento del Frente, junto a la Federación Agraria, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Partido Comunista. En el acto, subidos por los organizadores, estuvieron Alfredo Bravo y Marcela Bordenave del ARI y Alicia Castro del Polo Social. La propuesta del plebiscito fue desarrollada por D’Elía, Nora Cortiñas, el presidente de la Federación Agraria y De Gennaro [...] Es decir que la consulta se ha convertido en la cobertura de apoyo a los candidatos antipiqueteros del ARI y el Polo Social. ¡Se pretende desplazar a los piqueteros del escenario político cuando son los que están a la cabeza de la lucha contra la pobreza!”. (En Solano, G. (2001), *Marcha del Frente de la Pobreza: la caravana Social del ARI y el Polo Social*, *Prensa Obrera*. Disponible en <http://prensa.po.org.ar/archivo/po/po723/marcha.htm> (Consultado por ultima vez el 27/08/2014).



Sur de ser “operados por los servicios” para provocar y justificar la represión sobre los cortes. A raíz de diferencias internas la Coordinadora Sur se disuelve y de su ruptura surge la Coordinadora de Trabajadores Aníbal Verón (CTD-AV) que decide no participar de la II Asamblea (realizada ese mismo año) “entre otras cosas, a causa de las declaraciones públicas de D’Elía” (Svampa y Pereyra: 2009: 82).

Si bien la segunda reunión mantuvo algunas líneas de continuidad con la primera, en ella se dieron rupturas en base a orientaciones ideológicas y criterios de lucha que dividieron al movimiento en dos grandes bloques: uno integrado por la FTV y la CCC y el otro por el nuevo Bloque Piquetero Nacional. La CTD-AV se mantuvo separada de ambas organizaciones. Luego de la crisis de diciembre la FTV y la CCC se apartan de las reuniones de la cúpula del movimiento piquetero y firman acuerdos con los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde en los que se pacta la entrega de nuevos planes sociales. Por su parte el Bloque Piquetero liderado por el Polo Obrero adquirió visibilidad y masividad mientras que el MTR y la CTD-AV iniciaron procesos de crecimiento y expansión generando lazos con sectores medios urbanos movilizados durante la crisis política de diciembre (Svampa y Pereyra: 2009).

### ***Puente Pueyrredón y Después 2002 -2008***

El gobierno de transición de Eduardo Duhalde estuvo signado por la agitación política de la clase media afectada por el “corralito”, el fin de la tasa de cambio fija y la presión de los Movimientos de Trabajadores Desocupados que habían comenzado a articularse a mediados de la década de los noventa. La estrategia sobre el conflicto social se balanceó entre la represión y la desmovilización por medio de políticas sociales. El 26 de junio de 2002, en el marco de una

movilización convocada desde los movimientos de desocupados<sup>20</sup> que se proponía marchar desde el Puente Pueyrredón hasta Plaza de Mayo, el gobierno autorizó la represión de los manifestantes que adquirió un alto grado de violencia por parte de las fuerzas de seguridad cuya máxima expresión fueron los asesinatos de dos militantes de agrupaciones de la CTD-AV, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki<sup>21</sup>. Las imágenes captadas por miembros de la prensa del momento de los asesinatos sumaron más indignación a un clima de por sí tenso y convulsionado, dando el impulso decisivo para que el gobierno provisional de Eduardo Duhalde precipitara el llamado a elecciones presidenciales y decretara la creación del plan Jefas y Jefes de Hogar, que amplió el universo de destinatarios<sup>22</sup> de subsidios estatales.

A pesar del clima de rotunda agitación social la elección presidencial se realizó en el mes de mayo de 2003. El resultado fue tan peculiar como su contexto: Carlos Menem y Néstor Kirchner tenían que competir por el cargo en ballottage, pero al percibir una derrota inminente, Menem decidió renunciar a la elección convirtiendo a Néstor Kirchner en el presidente electo con el menor porcentaje de votos (22%) en la historia del país. La necesidad del nuevo gobierno

---

<sup>20</sup>Esta movilización contaba con un fuerte apoyo de las clases medias de la Capital Federal, que aún se encontraba activa y organizada en asambleas barriales. Esta tendencia fue incluso reflejada en algunos medios (Véase: Bruschtein, L. (24/01/2002), Cacerolas autoconvocadas y cortes de piqueteros, *Página 12*). Puede revisarse también el trabajo publicado por el FPDS, "Dignidad Piquetera" en el que se registran una cantidad sustantiva de apoyos a la convocatoria del 26 de junio de 2002 por asambleas barriales y manifestantes independientes a través de redes sociales. La consigna que resumía las manifestaciones de solidaridad entre unos y otros fue "Piquete y cacerola, la lucha es una sola".

<sup>21</sup> Para un desarrollo completo de los asesinatos y las persecuciones desarrolladas durante la jornada del 26 de junio puede consultarse el libro citado "Dignidad Piquetera", publicado por la CTD-AV, en el que se plasma la destacable investigación y reconstrucción de los hechos de esa jornada que realizó la organización, en la que se registra la virulencia del accionar de las fuerzas de seguridad que incluyó una verdadera "cacería" de piqueteros, la utilización de balas de plomo en contra de los manifestantes y maltratos en las comisarías. Puede consultarse además la película de Miguel Mirra "La dignidad Rebelde", disponible en: [https://www.youtube.com/watch?v=Xm4rG\\_\\_XTc0](https://www.youtube.com/watch?v=Xm4rG__XTc0)

<sup>22</sup> El Plan Nacional Jefas y Jefes de Hogar, está destinado a hombres y mujeres desempleados y con hijos en edad escolar y al momento de su lanzamiento representaba un monto de 150 lecops. Se caracterizó además por presentar condiciones de acceso más flexibles que el Plan Trabajar y por su énfasis en el reconocimiento de la ayuda social como un derecho y no sólo una transferencia de recursos por parte del estado.

de construir legitimidad era evidente y a pesar de los pronósticos más hostiles apenas tres meses después de su asunción las encuestas indicaban que la popularidad del presidente se había elevado hasta el 92%. ¿Cómo explicar este meteórico ascenso?. Hubo tres medidas principales que contrarrestaron la baja legitimidad inicial: en primer lugar el nuevo gobierno asumió como política de estado la condena a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar (1976-1983) y -consecuentemente, a los pocos días de su llegada al poder-, ordenó el pase a disponibilidad de la cúpula militar argentina moralmente cuestionada por su participación en el último régimen autoritario y reabrió causas de violaciones a derechos humanos cometidas durante ese gobierno de facto. En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia que durante los años noventa por iniciativa de Carlos Menem se amplió de cinco a nueve miembros (con el fin de incluir magistrados a favor del gobierno que le permitieran obtener una “mayoría automática” de la corte) fue restaurado a su número original y renovado con abogados de reconocimiento internacional. Por último, la actitud crítica del presidente sobre el FMI y los grupos empresariales extranjeros añadió más simpatías al nuevo gobierno mermando las filas de los sectores de izquierda y centro izquierda que habían crecido durante la crisis de 2001.

El nuevo tono político configuró un fuerte mensaje a los sectores dominantes de la economía de la última década con la intención de presentar un proyecto económico diferente al de la era del Consenso de Washington y configuró como adversario principal al menemismo y los grupos financieros internacionales como representantes del pasado neoliberalista que sumió al país en la miseria durante los años noventa. A su vez, el kirchnerismo no se constituyó desde la ortodoxia doctrinaria justicialista, sino que se definió a sí mismo y a su gobierno como “hombres

y mujeres comunes”<sup>23</sup> con responsabilidades extraordinarias. Los movimientos sociales y las castigadas clases medias y trabajadoras fueron el blanco de los discursos gubernamentales. Esos sectores políticamente desencantados fueron la clave para las elecciones legislativas de octubre de ese año que le otorgaron al Frente Para la Victoria la mayoría en el parlamento.

Algunos logros destacados del mandato de Néstor Kirchner fueron la renegociación de la deuda externa argentina cuyo default había ocurrido poco antes de su llegada al gobierno, una considerable baja en los índices de desocupación (21 % en 2003 a 8,5 % en 2007<sup>24</sup>), recuperación del sector industrial y la expansión de un nuevo modelo extractivo agro-exportador (basado en el cultivo de soja). La recomposición política y económica del periodo 2003 - 2008 generó una serie de corrimientos en el campo social al que asisten “por un lado una reconfiguración de las organizaciones de desocupados y una reemergencia del conflicto sindical; por otro lado, al compás de la explosión de los conflictos socio-ambientales, irían cobrando mayor importancia y visibilidad tanto las antiguas como las nuevas formas de lucha por la tierra y el territorio” (Svampa: 2008).

La situación de los movimientos sociales en el 2003 mostraba un grado importante de desmovilización, en parte por el proceso de institucionalización que habían encarado la FTV y la CCC y por otro lado como consecuencia de los violentos episodios ocurridos durante 2002.

Si bien existen diferencias entre los gobierno de Menem, Duhalde y Kirchner, en lo que respecta a su relación con los movimientos sociales, el kirchnerismo profundizó la estrategia de control y desmovilización que había iniciado su antecesor convocando a las organizaciones

---

<sup>23</sup> Discurso pronunciado en el acto de asunción presidencial por Néstor Kirchner, 25/05/2003, disponible en <http://www.presidencia.gob.ar/discursos>

<sup>24</sup> Datos proporcionados por el INDEC. Disponibles en: <http://www.indec.mecon.ar/>

populares a participar del gobierno, intercambiando espacios institucionales y la atención de las reivindicaciones sociales de cada grupo por la desmovilización de sus bases. En este sentido la implementación del plan Jefas y Jefes de Hogar (desde el año 2002 en adelante) que significó un aumento de las partidas destinadas a ayuda social de 700 mil a casi 2 millones de pesos<sup>25</sup> - al momento de su lanzamiento-, ayudó al peronismo a “recuperar” el espacio político que había perdido a manos de las organizaciones de tipo territorial (Svampa y Pereyra: 2009). A contrapelo de las estrategias predominantes asumidas por gran parte de las organizaciones de desocupados el FPDS asumió una postura crítica frente al gobierno del Frente Para la Victoria. Las razones que explican esta decisión son varias y como veremos en este capítulo se ligan a los efectos que la organización promueve en las instituciones democráticas, pero también es necesario señalar un factor de peso que influye en la relación entre la organización y el gobierno que es la tensión generada por el reclamo de juicio y castigo a los autores materiales y políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Entre los denunciados por la organización figuraban funcionarios del nuevo gobierno que habían ocupado espacios de responsabilidad política durante el 2002. En el 2003, a pocos meses de comenzado su mandato, el presidente Néstor Kirchner ensaya un primer acercamiento hacia las organizaciones piqueteras que el gobierno denominaba “duras”<sup>26</sup>, entre las que se encontraba la CTD-AV que recibió una propuesta específica del gobierno de crear una comisión investigadora para asistir a la justicia en el esclarecimiento de los asesinatos de Avellaneda. La medida nunca se concretó y la posición de los familiares de las víctimas y de la organización respecto de las responsabilidades políticas

---

<sup>25</sup> Información citada por Svampa y Pereyra (2009) en base a cifras del INDEC. Ver Svampa y Pereyra: 2009: 238.

<sup>26</sup> Ver Sued, G. (10/06/2003), Kirchner recibió los reclamos de los piqueteros duros, *La Nación* y Thieberger, M. (22/02/2004), Ofensiva del Gobierno para limitar a los piqueteros duros, *Clarín*.

sobre los hechos se mantuvo firme hasta la actualidad<sup>27</sup>. En octubre de 2005 (mismo año en que comenzaron los juicios contra los responsables materiales de los crímenes) el poder ejecutivo emitió un decreto por medio del cual solicitaba a la SIDE la apertura de los archivos vinculados a la represión del año 2002 pero restringiendo su uso a material de consulta que no podría ser incluido en la causa por los querellantes. Ambas medidas colaboraron a distanciar al gobierno de la organización que hasta la actualidad reclama el juzgamiento -por su responsabilidad como funcionarios públicos durante los hechos- de Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Alfredo Atanasof, Juan José Álvarez, Aníbal Fernández, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Jorge Matzkin, Felipe Solá y Luis Genoud (funcionario de Seguridad provincial en ese entonces).

El FPDS y otras organizaciones afines asumirán más adelante el desafío de privilegiar la autonomía de sus organizaciones en base al desarrollo de proyectos productivos, la profundización del trabajo territorial y la ampliación de su dimensión política incorporando luego los reclamos de trabajadores asalariados, campesinos y estudiantes. La multisectorialidad como estrategia también incluyó la articulación con organizaciones de la militancia cultural y la creación de espacios de discusión sobre problemáticas de género. Veremos que el nacimiento del Frente Popular Darío Santillán está ligado no sólo a los procesos de cambio desarrollados en este

---

<sup>27</sup> La comisión habría estado integrada por representantes de organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas. Sin embargo, luego de un año de dilación la propuesta se modificó, excluyendo la participación de los familiares. La demora y las modificaciones generaron una gran desconfianza por parte de la organización hacia el gobierno y diferencias al interior de la CTD-AV que llegó incluso en 2004 a realizar el reclamo por el juicio a los responsables de la Masacre de Avellaneda en dos grupos separados. Un sector de la organización, liderado por Juan Cruz Dafuncho adoptaría una postura de tipo “dialoguista” con el gobierno, mientras que las organizaciones nucleadas en el FPDS (que incluían a los familiares de las víctimas) mantendrían una clara posición de descontento y llegarían a formar una comisión no gubernamental (integrada por organismos de derechos humanos). Para más información sobre la comisión pueden consultarse: Sued, G. (10/06/2003), Kirchner recibió los reclamos de los piqueteros duros, *La Nación*; Piqué, M. (31/10/2003), Desandando el sinuoso camino, *Página 12*; *Página 12*, 27/12/2003, Castigo a todos los responsables (27 de diciembre de 2003), *Página 12*, Vales, L. (25/06/2004) Duhalde debía hacer una demostración de fuerza; *Página 12*; Vales, L. (27/09/2004), Dos cortes en un puente por Kosteki y Santillán, *Página 12*. Vales, L. (25/11/2004), Una Comisión no Gubernamental, *Página 12*; Vales, L. (27 de noviembre de 2004), Reclamo por la masacre de Avellaneda, *Página 12*; A casi treinta meses seguimos con las manos vacías de justicia, 27/12/2004, *Página 12*.

capítulo sino que responde también (para decirlo en términos de Migdal) a los reacomodamientos de las fuerzas sociales que se dan en el campo de los movimientos de trabajadores desocupados después de los violentos episodios de represión ocurridos en junio de 2002 y el cambio de gobierno en 2003.

Creemos que las reflexiones que dan origen a la creación del FPDS adquieren una dimensión aún más profunda al repasar el derrotero de actividades políticas que atravesó el movimiento de trabajadores desocupados desde sus primeras manifestaciones en el interior del país y a partir de las actividades barriales y ocupaciones territoriales “fundantes” que articularon las organizaciones en los centros urbanos de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el FPDS nace cuando el movimiento piquetero se encuentra atravesando un período de “reflujo” en el que los exponentes de mayor peso y con mayor capacidad de convocatoria se “institucionalizan”; en ese contexto la trayectoria de la CTD-AV marcada por la preservación de autonomía y la promoción de determinados valores y estrategias de organización pueden ayudarnos a entender el posterior desarrollo del FPDS, los valores que busca promover entre sus miembros, su relación con el gobierno, con otras organizaciones políticas y las instituciones democráticas.

## **Capítulo IV**

### **El Frente Popular Darío Santillán**

El Frente Popular Darío Santillán declara en su página web agrupar alrededor de “5000 mujeres y hombres distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Córdoba, San Luis, Santa Fé, Tucumán, Jujuy, Formosa, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”<sup>28</sup>. A su vez, se autodenomina como “organización social” sin lazos primarios o constitutivos de tipo partidario cuyas principales actividades están orientadas a dar respuesta a demandas territoriales e interpelar las instituciones democráticas para la resolución de problemas sociales, y que visualiza la participación política como un móvil significativo. Hemos encontrado pocos trabajos que se focalicen en esta organización en particular; entre ellos, los aportes de la tesis de maestría de Francisco Longa (2012), un trabajo de Melina Vázquez (2012) y la tesis de maestría de Ivone Cristina de Sá Cavalcante (2012) han resultado de gran ayuda a la hora de reconstruir la relación existente entre la forma de organización interna y los significados y sentidos que articulan las prácticas de los integrantes del FPDS así como algunos datos objetivos que nos permiten dimensionar la organización. Sin embargo intentamos privilegiar la información provista por los entrevistados con el fin de integrar las miradas teóricas que desarrollamos en el segundo capítulo.

La Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD-AV) que agrupaba un gran conglomerado de Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTDs) de la zona Sur del Conurbano de la provincia de Buenos Aires<sup>29</sup> se rompe luego de los asesinatos del Puente

---

<sup>28</sup> [http://frentedariosantillan.org/fpds\\_ant/fpds/](http://frentedariosantillan.org/fpds_ant/fpds/). Consultado por última vez en octubre de 2012.

<sup>29</sup> Integran la CTD-AV los CTD-Quebracho (La Plata, Bernal y Lanús) y MTDs de zona sur (Quilmes, Lanús, Almirante Brown y San Francisco Solano).



Pueyrredón; la conmoción que produjo el asesinato de dos de sus militantes comenzó a acentuar diferencias internas preexistentes en torno al planteo de algunos sectores de apostar a un desarrollo político mayor de la organización y en relación a las posturas que se deseaban asumir frente al nuevo gobierno: *“Son un grupo de movimientos los que deciden constituir el Frente en el 2004, cuando la Verón ya está partida, y está partida porque hay estrategias muy diferentes de cómo pararse frente al gobierno y cómo actuar después de la masacre y de lo que sucedió con el asesinato de Darío y Maxi”* (Ex-integrante del FPDS).

Si bien hemos señalado que existe una gran heterogeneidad entre los movimientos piqueteros, una característica distintiva de las organizaciones agrupadas en la Coordinadora Aníbal Verón era su inscripción ideológica en una tradición guevarista y la apuesta por la horizontalidad en los procesos de toma de decisión, lo que determinó en gran medida su alejamiento de los partidos de izquierda tradicional y las agrupaciones sindicales, así como la adopción de un posicionamiento estratégico en relación a las demandas reivindicativas de planes sociales y puestos de trabajo<sup>30</sup>. Aún con diferencias, las agrupaciones al interior de la CTD-AV compartían la idea de alcanzar horizontes más amplios que implicaban de una u otra manera el desarrollo de estrategias políticas orientadas al mantenimiento de la autonomía de las organizaciones respecto del gobierno y de los partidos considerados “más tradicionales”, incluso los de izquierda. La posibilidad de ocupar un espacio autonómico se convertirá en un problema transversal en muchos de los debates de la coordinadora y posteriormente una línea de orientación estratégica determinante en la organización interna del FPDS. La constitución de un “Frente” implicaba para sus impulsores un crecimiento de la organización y nuevos problemas a

---

<sup>30</sup> Veremos más adelante que ambos aspectos se reproducen en el FPDS.

resolver; entre los debates que se suscitaron al interior de la organización nos resulta interesante por su relación con la cuestión de la autonomía el del peligro de la “burocratización”<sup>31</sup>; nos detendremos en las medidas que el FPDS adopta para evitarlo ya que creemos que guardan relación con los efectos democratizadores de la organización en su conjunto al promover mecanismos participativos y valores compatibles con dichos efectos. En tal sentido, observamos en los debates relativos a la autonomía el desarrollo y discusión de cuestiones como la “horizontalidad”, la “democracia de base” y el “poder popular” la promoción de prácticas democráticas de empoderamiento político y la configuración de sentidos que contribuyen a los procesos democratizadores.

### ***El problema de la burocratización y el porqué de la pirámide invertida***

Las reflexiones sobre las formas que debía tomar una organización están inevitablemente cruzadas por las experiencias de trabajo territorial y político que adquirieron los participantes durante los noventa; de manera que el problema de la “posible burocratización de los compañeros” es atendida no desde una perspectiva macarthista de persecución sino como una potencialidad inherente a las dificultades de cualquier organización humana que emprende tareas colectivas. En esta sección reproduciremos fragmentos de un análisis de Guillermo Cieza (integrante del FPDS), publicados en un tomo de la serie de su autoría titulada “*Borradores sobre la lucha*”. Hemos elegido esta fuente porque -aún cuando el autor define sus aportes como

---

<sup>31</sup> Los integrantes del FPDS utilizan el término en referencia explícita al de “*burocracia sindical*” de los setenta tal como lo refleja la siguiente cita: “[la peligrosidad del burócrata sindical no dependía exclusivamente de sus contactos con la patronal y el gobierno, sino del hecho de que [los burócratas sindicales] tenían prestigio personal ante las bases, manejaban el discurso con que podían impactar la sensibilidad de los trabajadores y conocían perfectamente a aquellos activistas que no se habían vendido y necesitaban aislar políticamente, para que después las patronales los despidieran sin mayores costos” (Cieza: 2011:119)

una opinión más para contribuir a las discusiones del colectivo al que pertenece- en base al trabajo de campo realizado y la evaluación de publicaciones de otros integrantes de la organización, entendemos que refleja con gran claridad la concepción sobre los desafíos que continuamente enfrenta el FPDS como movimiento.

En el análisis mencionado, se distinguen dos dimensiones que “provocan la burocratización”, una objetiva y otra subjetiva. La primera se refiere a estructuras organizativas y actividades concretas, mientras que la segunda advierte un “proceso psicológico [que] se dá casi siempre en el marco de una militancia abnegada, llena de sacrificios y limitaciones personales autoimpuestas en aras del proyecto colectivo” (Cieza: 2011: 117). En relación a las condiciones materiales el autor advierte que allí donde las intervenciones y los compromisos de los integrantes no son parejos se encuentra uno de los “gérmenes de la burocratización”. De esta manera, “el problema es que el que más hace se sienta con más derecho a decidir. La expresión en este caso es <<Yo decido, total si acá el único que laburo soy yo>>” (Cieza: 2011:116). Esta condición no es por sí misma suficiente para la burocratización pero si estas percepciones se encuentran con una estructura centralizada de las tareas denominadas superestructurales, el “cansancio militante” y la “seducción del poder” terminan de crear las condiciones necesarias para la burocratización.

La centralización de las tareas superestructurales (reuniones con otros movimientos o funcionarios públicos, actividades de prensa) aparece como consecuencia del distanciamiento que tales actividades pueden provocar respecto de las tareas de la base del movimiento que requieren la presencia física de los participantes (el trabajo en los espacios productivos, la atención y discusión sobre las necesidades y problemas cotidianos). Sucede entonces que “la

propia tarea aísla a los compañeros de los colectivos que los mandatan, los individualizan y a veces se ven forzados a flexibilizar posiciones colectivas para alcanzar un consenso, pero también a responder sobre cuestiones no suficientemente discutidas (...). La práctica de decidir aisladamente refuerza la idea de que se tiene el derecho a hacerlo. Y es frecuente observar cómo la propia función se va comiendo al individuo. (...) El paso siguiente es la concentración de tareas superestructurales, toda la energía militante se concentra en cuatro direcciones: la relación con el Estado, la relación con la prensa, la relación con otros grupos u organizaciones, la relación con fuentes de financiación” (Cieza: 2011: 116).

Si este diagnóstico se cumple nos encontramos con que las condiciones objetivas para la burocratización ya han sido desplegadas; sin embargo esto no es suficiente sino que resulta necesario que se den conjuntamente las condiciones subjetivas para ello. El proceso subjetivo que conlleva la conversión de militante a burócrata se liga fuertemente a la forma en que la idea de imprescindibilidad mencionada en el párrafo anterior comienza a operar. El “militante multifunciones superestructurales” deja de sentirse acompañado por el colectivo cuyos tiempos de discusión y consenso son más largos que los exigidos por el militante individual. Tales exigencias son muchas veces artificiales en la medida en que surgen de una distorsión de la percepción de la realidad del militante quien “caracteriza que no vivimos en una etapa prerrevolucionaria, pero vive como si así lo fuera. Y exige a los demás que lo acompañen en su ritmo, que no incluye momentos de reflexión, de vida familiar de ocuparse de cuestiones que no abarcan su obsesión militante (...) las urgencias y el culto a la eficacia son las promotoras de la elitización de las organizaciones. Y si algo caracteriza al elitismo es la pérdida de confianza en las personas comunes, en las capacidades de los muchos” (Cieza: 2011:117).

La desvinculación de la vida substantiva<sup>32</sup> de quienes constituyen el colectivo cotidianamente opera sobre el militante abnegado alimentando el elitismo y el distanciamiento que permiten su burocratización y que lo llevan a encontrar la responsabilidad de sus frustraciones en la “inoperatividad” de las bases que cree representar. Las propias circunstancias de la vida política activa y un contexto político y social por demás adverso como el que envuelve a los movimientos de trabajadores desocupados -descrito en el capítulo anterior- nos acercan bastante al derrotero de circunstancias que recorre un militante social de base hasta convertirse en burócrata. El peligro de esta circunstancia radica justamente en que “la rabia del militante ascendido a referente tiene otras posibilidades. Tiene un precio en el mercado. Allí entra en juego la seducción del poder institucional” (Cieza: 2011: 118).

Nos detuvimos en esta descripción porque creemos que el espacio político que busca ocupar el FPDS se liga estrechamente a la superación o la prevención de la burocratización de sus miembros; de allí la insistencia de los entrevistados en distinguir la ausencia de “dirigentes” al interior de la organización y el rechazo a las estructuras “verticalistas” (jerarquizadas) que señalan como características distintivas de los sindicatos, los partidos políticos y la izquierda tradicional. La protección y construcción de la autonomía no es sólo en relación al Estado (o el gobierno) sino que se refiere a mantener cierta distancia de esas organizaciones políticas. Es innegable que los márgenes de autonomía a los que nos referimos deben ser entendidos en términos relativos puesto que en gran medida su sustento depende de las negociaciones con el Estado o de potenciales alianzas con otras organizaciones, sin embargo creemos que el grado de

---

<sup>32</sup> Pensamos lo substantivo en términos de Polanyi: *lo real*.

autonomía relativa que ha logrado sostener el FPDS ha generado un tipo de activación política que contribuye a la ampliación de las relaciones democráticas.

Entendemos que el mantenimiento de esta posición fue posible además por dos factores: por un lado la construcción de una estructura organizativa que busca evitar la concentración de los espacios de representación y de decisión dentro de la organización; y por otro lado una fuerte convicción en la búsqueda del consenso (real, substantivo) como método legitimador de las decisiones políticas de la organización. A su vez, creemos que el éxito (o fracaso) de la autonomía del FPDS opera en dos planos: hacia fuera, es decir en relación al Estado y otras organizaciones, y hacia dentro, es decir en relación al empoderamiento de sus integrantes.

### ***Estructura organizativa: la pirámide invertida y la asamblea***

*“(...) notaba como que el Frente tenía un efecto seductor muy poderoso... sobre compañeros que venían desilusionados de la práctica de la izquierda tradicional, que no encontraban un espacio político, que estaban asqueados de la política de aparatos... buscaban otra cosa... y el Frente convocaba a un espacio en el cual no había un dirigente que te mandara, donde ni bien entrabas ya tenías un lugar; donde las actividades tenían un vínculo bien concreto con una realidad social concreta, en donde lo lúdico, lo festivo, lo artístico, estaba presente, en fin era un ámbito de militancia más que atractivo, sobre todo para aquel que había militado en una agrupación de izquierda o en un partido político clásico, donde te mandaban a pegar carteles, cuatro tipos bajaban la política, vos ingresabas en la base de una pirámide... digo, eso no pasaba. Entrabas a un lugar democrático, participativo, en donde rápidamente te sentías parte de un colectivo y decidías junto con el colectivo, en fin, ¿como no va a ser seductor eso?*

*(...) Bien, en ese momento el movimiento piquetero fue catalogado como “zapatismo urbano”; era un época también donde el movimiento de los Sin Tierra estaba en una buena situación, antes del gobierno de Lula que lo afectó bastante al Movimiento Sin Tierra... Entonces el Frente aparecía como una expresión local de los movimiento antisistémicos latinoamericanos... en Argentina, la expresión del movimiento antisistémico era el Frente, su parangón era o los Sin Tierra o el zapatismo, ¿cómo no va a ser seductor eso?”. (Ex-militante del FPDS)*

La estructura organizativa del FPDS está fuertemente inspirada en los formatos asamblearios de las organizaciones territoriales de los MTDs que integraban la CTD-AV; por otro lado, si bien la forma que fue adquiriendo se basó en el “ensayo y error”, es posible rastrear otras influencias específicas como el Movimiento Sin Tierra -MST- (Brasil) y el Ejército Zapatista de Organización Nacional -EZNL- (México), tal como lo mencionaran algunos de nuestros entrevistados. Asimismo, aún cuando es indudable que la matriz ideológica del FPDS (que se nutre de un amplio abanico que incluye corrientes diversas como el peronismo de base de los setenta, el guevarismo y el marxismo) ha jugado un papel importante en este aspecto, los entrevistados coincidieron en que la experiencia organizativa territorial de los años noventa fue definitoria en el formato que adquirió su organización. En este sentido, quienes deciden armar el FPDS lo hacen pensando en un espacio que sintetice las experiencias de lucha y organización que se habían dado desde mediados de los noventa en adelante. Se buscaba además la posibilidad de incluir organizaciones de distintas vertientes ideológicas que pudieran construir una identidad colectiva desde la diversidad, con espacio para el disenso y la discusión pero también incorporar un eje sectorial que fuera transversal al territorio y que convocara distintos sectores. La inclusión de agrupaciones estudiantiles, de género, cultural campesina y asalariada le dió a la organización

un carácter multisectorial que la distinguió de los movimientos de trabajadores desocupados anteriores. Esto respondió también a la lectura del nuevo contexto, de recuperación económica y reflujó del movimiento piquetero.

Con el fin de dimensionar el tamaño y la diversidad interna de la organización hemos confeccionado un cuadro que agrupa las organizaciones integrantes del FPDS de acuerdo a su pertenencia regional (Cuadro 1).

Cuadro 1. Organizaciones que integran el FPDS según su pertenencia regional.

Regionales del FPDS	Organizaciones que integran cada Regional
Conurbano	Roca Negra-Predio Recuperado Trabajo, Educacion y Cultura Popular - Polo Textil y centro Cultural en la Estación Darío y Maxi-Ex Avellaneda - MTD Lanus (La Fe-Gonnet-Villa Urquiza-La Torre) - MTD La Cañada - MTD Lomas - Querandies MTD Javier Barrionuevo de Esteban Echeverria (barrios La Quinta-Las Colinas-El Píal-9 de enero) - MTD Almirante Brown (barrio Cerrito) - Lacandona (Guernica) -Organización Tierra, Trabajo y Educación (OTTE Ezeiza) - Unión de Trabajadores de la Tierra (Parque Pereyra-Berazategui) Trabajadorxs ocupadxs de la zona sur Movimiento Darío Santillán (Dock Sud-Valentin Alsina-Avellaneda) Barrio Villa Itati-Quilmes - Juventud Darío Santillán-Conurbano Bachillerato Popular El Puente Bachillera Popular Roca Negra FM 105.1 Radio Roca Negra FM De Frente Murga Picadillo Murguero Estudiantes organizados en el FPDS. Cátedra Darío Santillán (Universidad de Avellaneda) -Agrupación Estudiantil Estudiantes Críticos.
CABA	La Fragua Capital MTD Lugano (Villa 20)- Movimiento Darío Santillán (Constitucion-San Telmo-Villa 21/24/Barracas-La Boca-Pompeya) Colectivo SurAlterno Radio FM Che Barracas 99.7 - Espacio de mujeres Luchadoras Latinoamericanas Bachillerato Darío Santillán (Barracas-Constitución) - Juventud Darío Santillán - Capital Terciarios FPDS (Joaquín V. González, Normal 1, Normal 4 y Normal 7)



Neuquén - Río Negro	MTD (barrios Costa Norte-Costa Sur-Antártida-10 de enero-Cipolletti-Awka Liwen) La Fragua Neuquén-Río Negro Estudiantes y docentes del FPDS en la Facultad de derecho y ciencias sociales - Colectivo Vientos del Sur Espacio de Genero
Córdoba	Movimiento Convergencia (barrios Pilar-Villa Pigue-Villa El Chaparral-Villa Las Canitas-Villa La Tablita-Ciudad Evita-Oña- Villa los 40 Guasos-Villa El Trencito) Militantes organizados en el FPDS.
Rosario	Movimiento 26 de Junio (barrios Moreno-Tablada-Alvear-Cristaleria-Via Honda) Juventud Darío Santillán-Rosario
Tucumán	Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas-COBA (Barrios Alberdi Norte-Asentamiento La Via-San Roque-Smata)
Chaco	Organizaciones de Pueblos Originarios (OPO), Castelli (barrios Chacra 108 - Quinta 17 - Quinta 28 - Quinta 66 -Barrio 19 de Abril - Barrio Mapic - Paraje Pampa Argentina - Paraje El Alado - Barrio Opo-Chacra 51 - Paraje El Espinillo)- MTD 17 de Julio "La Nueva Generación", Resistencia (barrios Mariano Moreno - Villa Don Andrés - Barranquera - Barrio Villa Saveedra - Barrio San Carlos - Paraje Lapachito)
La Plata	Unión de Trabajadores de la Tierra (De Banderitas, Abasto, Los Hornos, El Peligro, Parque Pereyra)

Fuente: Elaboración propia en base a la información consignada en <http://frentedariosantillan.org/> . (Consultado por última vez en junio 2014)

En gran parte de las entrevistas realizadas los participantes utilizaron la analogía de “pirámide invertida” para ilustrar la estructura organizacional del FPDS. La imagen evocada resulta útil a la hora de dimensionar el énfasis que la organización otorga a los mandatos de las bases pero presenta algunos problemas para trasladarlo al funcionamiento real sin que se pierda la dimensión colectiva de las instancias de discusión y decisión debido a que la selección de delegados para las mesas orgánicas regionales parecen sugerir sub-sets de participantes que terminarían en un vértice reducido. Con el fin de evitar esta confusión realizaremos una breve descripción del funcionamiento y un esquema a modo ilustrativo de la estructura decisional de la organización.

Para entender el funcionamiento de la *pirámide invertida* debemos tener en cuenta que existen dos **instancias de discusión y síntesis**, que son siempre de carácter asambleario y abierto

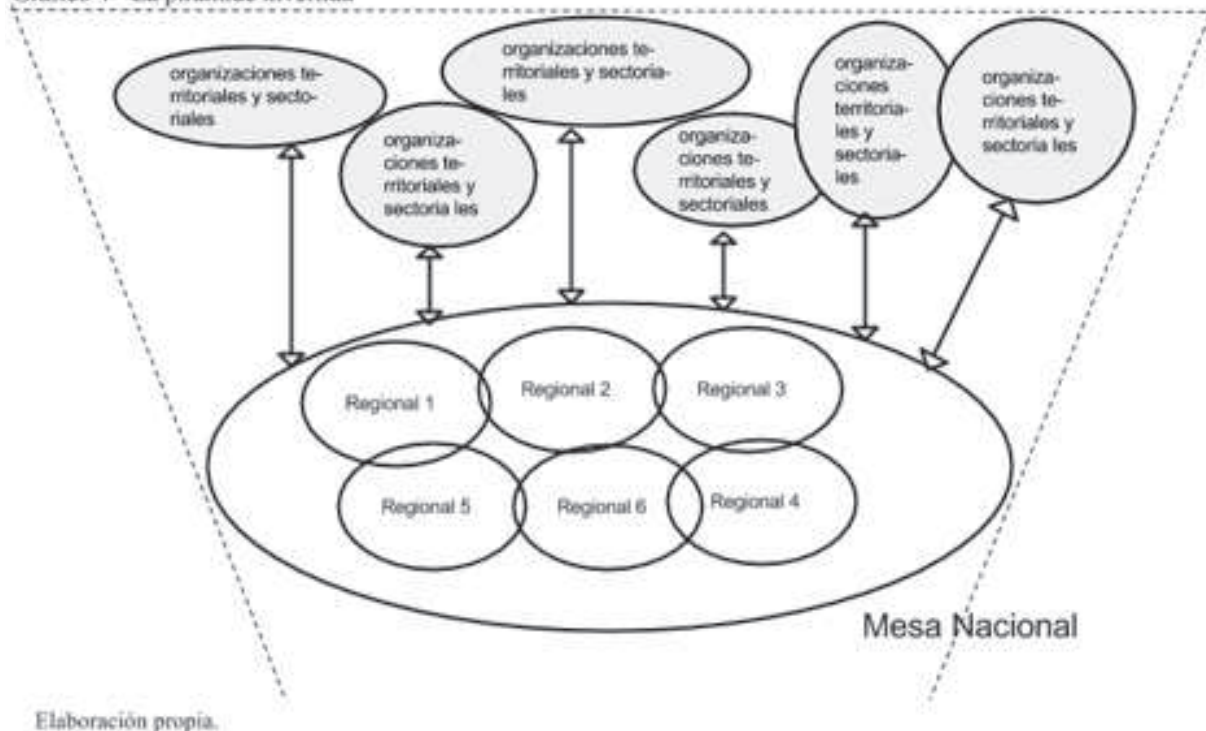
a todos los miembros de la organización y que toman la forma de “mesas orgánicas de discusión”. La primera instancia es la que se da cada organización o núcleo sectorial en su mesa orgánica, allí se discuten problemas, necesidades, inquietudes, propuestas e intereses. La síntesis de esas mesas orgánicas son mandatadas a las Mesas Regionales. Luego se da una segunda instancia de discusión que transcurre entre las Mesas Regionales constituyendo de esa manera la Mesa Orgánica Nacional en la que se intenta sintetizar el mandato de todas las regionales. Existe un primer eje organizador delimitado por el espacio territorial que se corresponde en términos organizativos con las ocho regionales del FPDS que hemos listado en el cuadro 1 y un segundo eje sectorial transversal que comprende las organizaciones estudiantiles, culturales, de género, trabajadores asalariados y campesinos. Se contempla además la posibilidad de realizar dos plenarios anuales que convoquen a todas las organizaciones que integran el FPDS donde el núcleo de la discusión pase por las asambleas de cada espacio de trabajo y que halla una instancia de reunión que incluya a todas las asambleas en pleno.

Los primeros espacios de discusión los conforman concretamente las organizaciones dispersas en cada región que representadas en las regionales intentan sintetizar líneas de acción para todo el movimiento. Resulta interesante incluir en este punto que el FPDS se propuso desde un inicio adoptar un carácter multisectorial que incluyera en su seno no sólo organizaciones de trabajadores desocupados sino que articulara organizaciones del sector estudiantil, trabajadores asalariados, organizaciones de género y culturales cuyas dinámicas e intereses también debían poder ser sintetizados en la organización. Otra característica notable de los mecanismos de toma de decisión de la organización es una preferencia por la no utilización del voto como mecanismo para dirimir diferencias; esto se vincula con otros aspectos que desarrollaremos en un apartado

específico pero que ponemos de relieve en este punto porque todos los entrevistados han coincidido y señalado de diferentes maneras lo que se resume en la siguiente cita: *“Si hay una discusión y no se llega a un acuerdo, a un consenso, se vuelve a discutir para eso. No votamos nosotros. Ese consenso se transmite como un consenso del colectivo a la asamblea. Si eso genera alguna discusión en la asamblea puede ser que se lleve a una discusión desde la asamblea a la Mesa del Movimiento sobre ese consenso y volverlo a discutir”*. (Integrante del FPDS).

Aún cuando existen algunas distancias entre el funcionamiento ideal y el real de las asambleas (sobre todo en las instancias nacionales y plenarias, donde las condiciones materiales dificultan mucho el traslado de los participantes para una concreción plena de la misma), las instancias de discusión de cada organización existen y en el caso de la asamblea nacional aún cuando la mayoría de las veces no logra contar con la presencia de las regionales del interior del país, entendemos que las asambleas mantienen en general un espíritu participativo y de horizontalidad al que se suman mecanismos de rotación de delegados y/o referentes. Hemos esquematizado el proceso descrito en el gráfico 4.

Gráfico 4 - La pirámide invertida



### ***De lo ideal a lo real. La cuestión del “referente”.***

*“(…) si yo pienso en mí mismo digamos, yo sólo no voy a ganar nada digamos. Obviamente nosotros pensamos colectivamente todo; nuestra organización no tiene un... digamos... es todo democracia de base, nosotros definimos qué hacer qué no hacer; obviamente hay compañeros que tienen referencia; por ahí tienen la dinámica de llevar una discusión o de... debatir y hay compañeros que no pero bueno es todo un proceso”.* (Integrante del FPDS).

Una característica que los entrevistados remarcaron como distintiva del FPDS fue que si bien no se reconocen formalmente diferencias jerárquicas entre los miembros de la organización es innegable que existen diferencias “de hecho” desde el momento en que hay quienes tienen

experiencia política y quienes no o facilidad de argumentación frente a otros que por personalidad, inexperiencia o disposición pueden ser más pasivos en los debates. Es en este punto cuando la formación política adquiere un rol fundamental para los integrantes de la organización que depositan en esas instancias el empoderamiento de los militantes. Si bien existen ámbitos específicos en los que se estimula el desarrollo político de estos últimos (como campamentos o talleres de formación) sucede que todos los espacios de trabajo son pensados como instancias formadoras en la medida en que todas las decisiones que ejecuta cada colectivo deben ser consensuadas por quienes en definitiva las ponen en práctica y porque cada una de las actividades (desde el trabajo en una cooperativa, la atención de una guardería, o un corte de calle) se basa en la reconstrucción de lazos de reciprocidad y en los “*compromisos asumidos con los compañeros*” (desarrollaremos esta cuestión en otro apartado).

Los factores que confluyen en la constitución de un *referente* o un *responsable* pueden ser objetivos o subjetivos, sin embargo quienes asumen la responsabilidad de un espacio deben asumir además la obligación de impulsar el desarrollo político de sus compañeros. Si bien no existen mecanismos de evaluación sobre el desempeño de los responsables, los ámbitos de discusión y la ausencia de jerarquías al interior de la organización facilitan y proveen un espacio para la impugnación directa de quienes comienzan a transitar el camino de la burocratización o descuidan sus responsabilidades. La siguiente cita puede ayudarnos a ilustrar este último punto: “*A ver, por lo general siempre hay un proceso donde hay compañeros que están digamos, impulsando, con responsabilidad, con mandato un determinado espacio, un determinado ámbito. Esos son los compañeros que de alguna manera están participando en las mesas de síntesis cuando se cruzan. En Avellaneda, el compañero que va al sector territorial, va de la misma*

*manera que va un compañero de Lomas de Zamora, de Lanús, de Esteban Echeverría, de Ezeiza. Es decir, van compañeros, sí, que en principio tienen la responsabilidad de tomar, digamos, la orgánica. Nosotros impulsamos igual que ese compañero... -obviamente los espacios de poder existen en todos lados, todo el tiempo- entonces para que no se concentre información... y capacidad y formación en un solo compañero, ese compañero así como tiene la responsabilidad de cubrir esa orgánica, tiene que llevar adelante un proceso para que compañeros vayan asumiendo.... para no concentrar todo un ámbito en un solo compañero, tratamos de descentralizar de esa manera. Es un proceso, ¿no? No es que es de un día para el otro”.*  
(Integrante del FPDS).

### ***El problema del consenso***

*“ (...) si vos no te das tiempo para ciertas discusiones y tu fuerza tiene una diferencia de opinión muy aguda y estás 60/40, imponer la mayoría del 60 sobre ese 40 es una pelotudez política, digamos, expresado en términos muy directos. Por qué, porque eso genera un proceso de diáspora y de ruptura (...). Entre construcciones muy diversas, que provienen de identidades políticas diversas, de construcciones de base muy diversas, si vos aplicás mecanismos fácilmente sin darte el tiempo al debate, lo que en general son [se convierten en] mecanismos exclusivos, no democráticos. Por ahí nosotros pecamos excesivamente de lo otro; no prever ciertos mecanismos democráticos cuando había consensos mayoritarios que se podían resolver, y dilatar discusiones y no resolverlas cuando era visible que había una mayoría muy evidente, mayoría real. Pero siempre partimos de la hipótesis de que si las mayorías eran muy cerradas,*

*tomar una decisión con el tema del voto no era precisamente 'lo democrático', había que seguir dándole una vuelta a la discusión” (Ex integrante del FPDS).*

Una de las mayores desventajas que encierra la asamblea como mecanismo decisional aparece en los contextos de urgencia en que la coyuntura requiere la expedición rápida sobre una polémica o en la toma de posición frente a terceros. En ese tipo de escenarios la dinámica interna de la organización ha seguido preponderantemente el camino de asumir el costo de no pronunciarse en base a mayorías relativas sobre un problema y mantener el debate abierto hasta la consecución del consenso de la totalidad de los participantes.

Hasta ahora hemos desarrollado algunos aspectos de la estructura del FPDS, algunas de las distancias que presenta esa estructura respecto de su funcionamiento real y las medidas existentes para acortar dicha distancia; abordaremos aquí el problema del consenso que entendemos como un aspecto importante del proceso decisional de la organización y que nos permite afirmar que tiene un doble carácter: positivo y negativo.

Existen dos premisas esenciales de la organización que operan en la definición acuerdos: la adhesión a la idea de *democracia de base* y la construcción de *poder popular* como medios para la construcción del cambio social. Ambos conceptos implican para los miembros de la organización la búsqueda de una igualdad efectiva entre los participantes a la hora de la discusión o la síntesis que se expresa no sólo en los largos debates del FPDS (que en ocasiones incluso atentan contra los objetivos de corto plazo de la organización) sino en la intención expresa de no utilizar el mecanismo del voto para dirimir las diferencias (tal como lo ilustra la cita que abre este apartado) a fin de evitar que se impongan mayorías en instancias de gran polarización. De esta manera, la búsqueda de consenso implica un arduo trabajo de discusión que

da carnadura a una estrategia de largo plazo cuyo objetivo es el cambio social; este objetivo más amplio se liga a la construcción de lo que el FPDS llama *poder popular* y que a su vez implica la participación real de las bases para la creación de una identidad colectiva. El poder popular es entendido como una fuerza difusa (no concentrada) y equitativa que constituye la base de la legitimidad de la organización; se manifiesta en la participación activa de sus integrantes y se construye orgánicamente en todas las instancias y actividades del FPDS.

En tal sentido, uno de nuestros entrevistados nos explicaba lo siguiente: “(...) *si nosotros creamos esa Democracia desde Abajo, esa participación colectiva de los barrios, de todos los lugares de donde estamos y vamos generando que se vaya sumando más gente y más gente hasta poder crear un poder que de verdad se pueda llegar a ver de que pueda ser contrapeso al que ya está impuesto, porque por ahora es una utopía... un sueño a realizar... (...) También es desde donde vos lo tomes....porque si decís “bueno che democracia desde abajo”, sí todo bien pero si de la democracia desde abajo solamente se lleva... viene una persona y propone algo y todos los demás dicen, “ah sí, bueno está bien”... eso tampoco es democrático... no quiere decir que cada más gente que haya va a ser más democrático, no... pero creemos que sí es importante que cada persona tiene un potencial adentro y que lo vaya expulsando. Capaz con lo de Poder Popular también...nosotros decíamos....el Poder Popular... nosotros lo hacíamos todos los días, en los lugares de trabajo y todo eso....”* (Integrante del FPDS).

Lo que nos interesa destacar en este punto es que quienes integran la organización no esperan que la participación surja espontáneamente sino que la fomentan por medio de actividades de formación política; los parámetros de la formación no implican la homogeneización de los integrantes si no la difusión de estrategias de acción y análisis político



que mejoren las posibilidades de los actores de entrar en el terreno de lo público y la difusión de valores compartidos que permitan la construcción de ideales y objetivos comunes.

### ***¿Qué se forma en la formación?. Las dos dimensiones de la Autonomía.***

Dijimos previamente que creemos que el grado de autonomía relativa que ha logrado sostener el FPDS ha generado un tipo de activación política que contribuye a la ampliación de las relaciones del sistema democrático. Con el fin de examinar ese proceso creemos oportuno desarrollar algunas distinciones analíticas realizadas en base a nuestro trabajo de campo.

En principio distinguimos dos dimensiones de la autonomía del FPDS: hacia fuera, es decir en relación al Estado y otras organizaciones, y hacia dentro o en relación al empoderamiento de sus integrantes. Asimismo, entendemos que el sostenimiento de ambos planos fue posible en base a dos factores: la construcción de una estructura organizativa que evita la concentración de los espacios de representación y de decisión al interior de la organización; y la fuerte convicción en la búsqueda del consenso (real, substantivo) como método legitimador de las decisiones políticas de la organización.

Cuando hablamos de autonomía nos referimos a los márgenes de acción con que un individuo u organización cuenta para tomar decisiones de manera independiente de acuerdo a sus creencias, valores y objetivos. Hemos dicho ya que la autonomía debe ser entendida como relativa en la medida en que las acciones de los sujetos (individuales y colectivos) no ocurren en el vacío sino en relación con otros sujetos del mundo social que interfieren e interactúan entre sí. En el caso del movimiento piquetero los límites a la acción se definen mayormente en relación con el Estado pero también en función de las alianzas y rupturas que se dieron entre las

organizaciones de trabajadores desocupados entre 2001 y 2002. A su vez, las posibilidades de movilización de recursos de las organizaciones se encuentran limitadas por condiciones materiales constituidas básicamente por la capacidad de reproducción de sus integrantes. Es posible entonces identificar también dos aspectos de la autonomía del FPDS, uno político y otro económico. El primero se construye a partir de las tensiones que generaron los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y en base a la configuración de una perspectiva política emancipadora que abreva de diferentes corrientes políticas ya mencionadas como el guevarismo, el peronismo de base y el marxismo, desde los que se han creado estrategias de acción y modelos ideales de transformación social, que entendemos se plasman en los conceptos “poder popular”, “democracia de base” -o socialismo desde abajo-. Este aspecto explica los posicionamientos críticos de la organización en relación a las políticas sociales oficiales, las diferencias discursivas en relación al gobierno y otras organizaciones populares sobre el rol de los movimientos sociales en la escena política, así como las interpretaciones de los miembros de la organización sobre las políticas sociales implementadas por el gobierno y su relación con las instituciones públicas en general. Un ejemplo de este aspecto lo constituye el conflictivo ingreso del FPDS al programa “Argentina Trabaja”, lanzado a fines del 2009, que retomaremos más adelante cuando analicemos los efectos del FPDS sobre las relaciones democráticas.

El plano económico de la autonomía lo constituye la administración de los subsidios sociales obtenidos sin intermediarios gubernamentales y la organización de espacios productivos como cooperativas de trabajo entre las que se encuentran emprendimientos como el polo textil en Avellaneda o la bloquera en Lanús, panaderías, guarderías herrerías y bachilleratos.

Respecto de las cooperativas, tanto integrantes como ex-integrantes del FPDS comparten la misma idea sobre el valor de tales actividades cuya importancia no radica puramente en la capacidad de cada espacio de producción para generar ingresos, sino en su potencialidad “pedagógico-política” en la medida en que se constituyen como lugares donde se practica una forma de organización diferente a la extendida en el mercado formal de trabajo en base a la ausencia de jerarquías y donde la responsabilidad sobre las decisiones de cada espacio productivo es colectiva. En tal sentido *“los productivos, si se los analiza sólo del punto de vista económico y de su eficacia material se comete un error porque probablemente muchos ‘productivos’ no eran exitosos en términos convencionales, no generaban lucro, es más, a veces estaban por debajo de eso, ni siquiera servían para garantizar la autosubsistencia de los propios compañeros que participaban de esos productivos que tenían que ir a conseguir laburos en otros lugares o complementar con el plan. Lo que pasaba en esos espacios es que se generaba un tipo de vínculo y un tipo de relación muy particular y ahí está la importancia política que tenían esos espacios, más política que material. En pequeño mostraban la posibilidad de un trabajo no alienado, un trabajo compartido, solidario, generaba además autoestima en los propios compañeros, en fin hay un montón de elementos extra-económicos que giraban en torno a los productivos”* (Ex-integrante del FPDS).

Testimonios como el precedente nos permiten inferir que la cuestión de la formación política se encuentra imbricada en el proyecto político de cambio social del FPDS de manera tal que no se restringe a actividades específicas, sino que atraviesa todas sus instancias participativas: los cortes, las asambleas, el trabajo, las actividades culturales, los bachilleratos. Desde esos espacios se promueven valores y prácticas prefigurativas que buscan potenciar la

solidaridad de los integrantes, el ejercicio y reconocimiento de derechos ciudadanos y, el ejercicio de mecanismos para exigir la efectivización de tales derechos.

Hemos intentado demostrar en los párrafos precedentes el modo en que este proceso de empoderamiento sucede gracias a los mismos mecanismos de participación internos de la estructura del FPDS y que a través de ellos se opera la configuración de *sujetos autónomos* dentro de un *colectivo autónomo*; de esta manera construir -y “sostener”- la autonomía del colectivo “hacia fuera” conlleva además que los integrantes del FPDS se inserten en el sistema democrático como ciudadanos empoderados, “colectivizados”, cuya pertenencia a la organización les permite superar las condiciones materiales que (previo a su militancia) limitaban su acceso a determinados mecanismos de demanda y subsistencia. De esta manera ambos aspectos de la autonomía -o mejor dicho, las actividades desarrolladas en los planos económico y político- contribuyen al empoderamiento de los integrantes del FPDS y a una configuración o figuración subjetiva específica. Las prácticas interconectadas por las redes y lazos creados en el “quehacer político” de la organización no prefiguran individualidades individualizantes sino “subjetividades colectivizadas”.

El análisis realizado hasta este punto buscó hacer visible los aspectos que consideramos más relevantes sobre el FPDS a la hora de evaluar los efectos que como organización social tiene sobre sus integrantes y por qué esos efectos pueden contribuir a la flexibilización, ampliación o extensión del entramado de relaciones institucionales que constituyen el sistema democrático.

Con el fin de especificar las características de estos efectos y el modo en que se inscriben en los procesos de democratización, desarrollaremos a continuación las observaciones recogidas durante nuestro trabajo de campo en base a la tipología elaborada por Warren.

### *Los efectos producidos por el FPDS*

a) *Efectos de desarrollo (Developmental effects)*: Hemos visto el modo en que la estructura organizativa del FPDS se funda sobre mecanismos que promueven la participación de sus integrantes en los procesos de toma de decisión colectiva. Sin embargo hay un segundo aspecto de este tipo de efectos que se refiere a la promoción de espacios que facilitan la formación de juicios autónomos en los que se reflejen los deseos y preferencias de los participantes. Si bien se ha recurrido a la interpelación directa a los entrevistados sobre si consideran que cuentan con la posibilidad de expresar diferencias al interior de la organización (y en todos los casos nos han respondido afirmativamente) creemos que otro aspecto que refuerza este efecto es lo que hemos descrito en este capítulo como “el problema del consenso” y el lugar que ocupa la “formación política” en la organización. Allí mencionamos también que la búsqueda de un consenso real entre los participantes en ocasiones ha atentado contra los objetivos de corto plazo de la organización. La importancia de alcanzar acuerdos con todos los integrantes para tomar decisiones (aún más si son significativas) nos permite pensar que cada militante es poseedor de un poder de veto efectivo, y que por tanto es esa condición lo que potencia la capacidad de decisión de cada miembro al interior de la organización así como su capacidad individual de influir en las decisiones del conjunto. Asimismo, hemos hecho hincapié en las herramientas discursivas y en las asambleas (mesas orgánicas) como espacios reflexivos en los que cada quien puede plantear sus necesidades y preferencias. La prerrogativa de una participación total de los integrantes (que es en definitiva la fuente de legitimidad del FPDS) necesariamente apela a que todos expresen sus intereses, incluso quienes se sienten más ajenos a las cuestiones “políticas”; allí donde existe una cooperativa de trabajo o un bachillerato, la propia

dinámica laboral o pedagógica implican la participación de los integrantes para definir el devenir cotidiano de cada espacio. Si bien la regularidad con que los integrantes del FPDS participan en las asambleas, marchas o piquetes puede variar entre unos y otros de acuerdo a factores como antigüedad en la agrupación o disponibilidad para hacerlo<sup>33</sup>, existe un marcado acuerdo sobre la “funcionalidad” de esos mecanismos.

Por otro lado hemos detectado una percepción compartida entre los entrevistados sobre la “solidaridad” y el “compromiso” (“con el movimiento y el bienestar de los compañeros”) como valores aprendidos y potenciados durante la militancia en la organización. A su vez, surgen como aprendizajes la toma de conciencia sobre la legitimidad de exigir la garantización de “derechos” - como “trabajo digno”, “alimento” y “vivienda”-; la posibilidad de ejercer demandas al Estado de manera colectiva y la *legitimidad* que adquieren los deseos y preferencias discutidos por “las bases” a través de *consensos reales*. Quienes atraviesan estos procesos y adquieren estos nuevos conocimientos potencian sus capacidades de operar sobre las desigualdades que los afectan y por ende amplían las relaciones institucionales democráticas. Es este el sentido de las expresiones de los entrevistados al referirse al FPDS como “herramienta de lucha” y “movimiento social y político” desde el momento en que la pertenencia a la organización implica una diferencia sustancial para quienes lograron desde ese espacio colectivo nivelar positivamente su posición en un contexto en el que la distribución del poder institucional los ubicaba previamente en una situación de desventaja. A su vez, el ejercicio casi cotidiano que requieren los espacios internos

---

<sup>33</sup> No pretendemos desconocer la existencia de otros factores que pueden funcionar como incentivos a la participación como la obtención de planes o la conservación de los mismos, sino que en base a nuestro trabajo de campo entendemos que los integrantes del FPDS manifiestan una visión a largo plazo que excede los límites de los reclamos reivindicativos.

del FPDS estimula continuamente y hace posible la participación de los integrantes en la formación y definición de significados y decisiones públicas.

Por otro lado, con el fin de identificar este tipo de efectos, solicitamos a los entrevistados que definieran la organización al comenzar y al finalizar cada entrevista. Al analizar la información resultante notamos (al comienzo y al final) la existencia de dos tipos de definiciones: una que apela a la dimensión (funcional) estratégico-política de la organización y otra que enfatiza el significado o valor personal que la organización tiene (o tuvo) para los entrevistados. En el primer tipo se pone de manifiesto la capacidad política del movimiento de articular demandas, obtener y organizar recursos, las características que lo diferencian de los partidos tradicionales de izquierda y sus objetivos políticos; mientras que en el segundo tipo de definición se refieren experiencias personales de los entrevistados en las que “el Frente” se convierte en el eje articulador de todas las actividades, en el espacio vital en el que transcurren y asocian todos los aspectos de la vida cotidiana de los militantes o en una experiencia significativa de “gran potencialidad” y crecimiento político y personal. En esta segunda definición sobresalen el aprendizaje de valores ya mencionados como la solidaridad y el compromiso, y la potencialidad de la forma organizativa asamblearia del FPDS como herramienta “para el cambio político y social”.

b) *Efectos en la esfera pública (Public spheres effects)*: una de las reivindicaciones fundantes del FPDS es el reclamo de justicia sobre los asesinatos ocurridos en junio de 2002. Tanto la CTD-AV, en un primer momento, como el FPDS después, fueron capaces de instalar ese reclamo en la agenda pública de manera sostenida por lo menos durante los primeros años que

siguieron al 2002. Aún cuando la presencia en los medios y la capacidad de presión de la organización sobre el gobierno para lograr una “respuesta política” sobre el esclarecimiento de las responsabilidades fue decreciendo con el paso del tiempo, creemos importante señalar que la importancia de ese reclamo no se limita sólo a su presencia mediática sino que fue un espacio de disputa en el que la organización desarrolló en gran medida su capacidad comunicacional y organizativa. Recordemos que las primeras versiones oficiales sobre lo que había ocurrido durante el corte del Puente Pueyrredón informaban que las muertes denunciadas habían sido producto de enfrentamientos entre movimientos piqueteros. Aún cuando las imágenes provistas por dos periodistas fueron fundamentales para desmentir estas acusaciones, el trabajo posterior de difusión y presión desarrollado por la CTD-AV y el FPDS para la concreción de los juicios a los responsables materiales y políticos de los asesinatos, convirtió la demanda en un reclamo de público conocimiento y un símbolo identitario de la organización. Luego de las condenas a los autores materiales de los asesinatos en 2006, el reclamo por la imputación de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda siguió siendo una de las banderas convocantes de la organización en la que se expresa además una “tensión de origen” entre esta y el gobierno y que por otro lado fue el eje temático que dió lugar a la ampliación del repertorio de acción del FPDS. Entre las estrategias comunicacionales desarrolladas por la organización para la expresión de esta demanda pueden mencionarse la realización de “vigilias” en el Puente Pueyrredón cada 26 de junio sumados a los cortes de la circulación del tránsito<sup>34</sup> para expresar el reclamo por “juicio y castigo a todos los responsables de la Masacre de Avellaneda” y la organización de actividades

---

<sup>34</sup> Entre 2002 y 2005 el corte sobre el Puente Pueyrredón era total y se realizaba mensualmente cada día 26. Luego de la condena del comisario Fanchiotti y el oficial Acosta, la modalidad varió y en lugar de cortar el acceso a capital cada mes se realizaron actividades en la ex-estación Avellaneda, manteniendo la modalidad de cortar el puente en cada aniversario anual de los asesinatos.



culturales y recreativas en articulación con otras organizaciones sociales<sup>35</sup> entre las que se incluyen intervenciones artísticas de la ex-estación Avellaneda; confección de murales, interpretaciones teatrales y paneles de discusión. Esta ampliación del repertorio de acción del movimiento pone de manifiesto una de las características distintivas de la organización como lo es su ligazón con organizaciones culturales y de otros sectores sociales que entendemos ha influido en la percepción que la opinión pública y los propios integrantes del FPDS tienen sobre la organización. Apoyamos nuestra percepción por un lado en un relevamiento realizado sobre la cobertura mediática de los actos de cada aniversario de la Masacre de Avellaneda en tres de los periódicos de mayor difusión del país en los que hemos podido observar un cambio gradual en las denominaciones utilizadas para nombrar al FPDS. Concretamente, entre los años 2004 a 2005 la organización fue caracterizada mayormente como “piqueteros” u “organización piquetera” y a partir de 2006 fue siendo incluida en la categoría más general de “agrupación social” u “organización social y política” y en ocasiones dentro del conjunto heterogéneo de “organizaciones políticas de izquierda”<sup>36</sup>. A partir de 2011 y hasta la actualidad el término “piquetero” se pierde de los titulares y de los relatos televisivos que se refieren al FPDS en favor del término “organización social”. Por otro lado, resulta interesante rescatar que las definiciones ofrecidas por los entrevistados sobre “el Frente” y sobre sí mismos raras veces incluían el vocablo “piquetero” pero sí las palabras “organización social”, “movimiento”, “herramienta

---

<sup>35</sup> Una de las acciones de mayor impacto mediático fue el cambio de nombre de la Estación Avellaneda de la línea de Ferrocarriles Roca por el de “Kosteki y Santillán”. Si bien el reconocimiento oficial mediante ley nacional llegó recién en el 2013, desde el 2006 la organización había comenzado a pintar los carteles de la estación con los nombres de los militantes asesinados. En junio de 2006 la iniciativa cobró estado parlamentario por medio de un proyecto de la Cámara Baja, que sería introducido por el entonces diputado Eduardo Macaluse y retomado por Liliana Parada (ambos pertenecientes a Unidad Popular).

<sup>36</sup> Para el seguimiento mencionado se consultaron los ejemplares de los periódicos *Clarín*, *Página 12* y *La Nación* editados durante el mes de junio de los años 2002 a 2014.

política”, “militante”, “referente” y “compañero”. Si bien los recursos disponibles para nuestro trabajo de campo no han permitido realizar una medición cuantitativa a nivel nacional o local sobre la percepción que la opinión pública tiene de la organización, los mismos integrantes ofrecieron una diversidad de explicaciones sobre cómo creen que son percibidos por terceros. En base a las respuestas obtenidas durante el trabajo de campo podemos señalar que la totalidad de los integrantes “cree o siente” que “son vistos” de manera “positiva” por vecinos (o terceros en general) y son percibidos como “una organización social diferente” o como “trabajadores”. Otro dato interesante que surge de las entrevistas indica que si bien los integrantes de la organización no reniegan del término “piquetero”, sí indican que cuando se encuentran realizando cortes o manifestaciones suelen ser caracterizados como tales en un sentido peyorativo por quienes “no entienden” los motivos de los reclamos y “te dicen de todo”. Hubo incluso quienes durante la entrevista “confesaron” que antes de formar parte de la organización nunca habían participado de una marcha y que “se querían morir” sólo de pensar en hacerlo hasta que se fueron “acostumbrando”. Más allá de estas diferencias, los relatos de los entrevistados sugieren que el vocablo *piquetero* resulta limitado para los miembros del FPDS a la hora de caracterizar la organización.

A su vez, la complejidad del reclamo sobre el juzgamiento de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda que planteó la necesidad de encontrar formas novedosas y atractivas para evitar su olvido se conjugó con el planteo político estratégico de la organización de lograr una articulación multisectorial. La inclusión de organizaciones culturales, campesinas, sindicales, estudiantiles y de género diversificó los espacios de trabajo al interior de la organización, ofreciendo un amplio “set de temáticas” que enriquecieron las discusiones de toda la comunidad

del FPDS generando una agenda amplia que incluye demandas relativas al empleo, reclamos sindicales, de género, agrario y estudiantil, que construyen y defienden los integrantes de toda la organización.

c) *Efectos Institucionales (Institutional effects)*: en relación a este tipo de efectos hemos intentado observar si efectivamente se dan los cinco tipos dentro de este conjunto: representación, resistencia, subsidiariedad, coordinación y cooperación y legitimación democrática. Si bien hemos insistido en que la organización busca mantener cierta distancia de las instituciones estatales en función del sostenimiento de su autonomía, también hemos señalado la relatividad de ese lugar en función de su relación con entidades estatales y de otras organizaciones políticas y sociales. En el caso del FPDS, las estrategias de interpelación a las instituciones públicas pueden variar ampliamente (desde una petición formal a un parlamentario hasta un escrache multitudinario) y el éxito de sus acciones políticas debe ser medido en términos relativos. Hemos elegido como caso ilustrativo el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el que el FPDS participó junto a otras organizaciones en ocasión del lanzamiento gubernamental del Plan Argentina Trabaja (en adelante PAT). Dicho plan fue anunciado públicamente por Cristina Fernández de Kirchner en agosto de 2009 como una herramienta para combatir la pobreza a través de la financiación estatal de cooperativas de trabajo que fueran constituidas por personas desocupadas. El subsidio fue definido como “ingreso social con trabajo” acentuando dos características distintivas del programa, la primera referida a la contraprestación en forma de trabajo y la segunda a la organización de los beneficiarios en cooperativas de cincuenta a setenta integrantes para la realización de trabajos de

mantenimiento y construcción en localidades definidas como “barrios, villas, comunidades y aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social”<sup>37</sup>. La primera instancia de intervención del programa se haría en el conurbano de la provincia de Buenos Aires asignando una suma inicial total de 1500 millones de pesos (destinados a la creación de 100 mil puestos de trabajo)<sup>38</sup> que serían repartidos entre los intendentes de esas jurisdicciones para su administración.

Si bien una de las medidas anunciadas para garantizar la transparencia en las asignaciones era la inscripción de los cooperativistas en el régimen de monotributo y la asignación de una tarjeta bancaria para el cobro de cada asignación a través de entidades crediticias, poco tiempo después de anunciado el programa varias organizaciones sociales comenzaron a denunciar que los intendentes municipales restringían la inscripción de las cooperativas, otorgando prioridad a quienes pertenecieran a organizaciones afines al gobierno. Los momentos de mayor tensión sucedieron en noviembre y diciembre de 2009 cuando diferentes organizaciones de trabajadores desocupados como la CCC, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive y el FPDS, organizaron acampes sobre la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para denunciar las dificultades para ingresar al PAT y el padecimiento de una red clientelar articulada por los municipios a través de la cual, quienes eran aceptados en el programa, sólo recibían un parte del total del subsidio correspondiente.

Al finalizar el conflicto el FPDS logró la inscripción de cooperativas formadas por sus militantes en el PAT y de acuerdo a la información provista por los entrevistados, el control y rendición de cuentas a los distintos municipios sobre los planes asignados, son realizados por

---

<sup>37</sup> Palabras pronunciadas por Cristina Fernández de Kirchner el 14 de agosto de 2009 durante la presentación del PAT. Disponible en : [http://youtu.be/WQb7K\\_bcLn4](http://youtu.be/WQb7K_bcLn4)

<sup>38</sup> Los datos mencionados surgen del anuncio de la presidente Cristina Fernández de Kirchner realizado el 14 de agosto de 2009. El anuncio se encuentra disponible en [http://youtu.be/WQb7K\\_bcLn4](http://youtu.be/WQb7K_bcLn4).

integrantes del movimiento en forma autónoma a diferencia de otras organizaciones que aún no han logrado ese objetivo tal como lo expresó uno de los integrantes del FPDS: *“nosotros estamos organizados, tenemos un grupo de gestión, un grupo de administración que son los compañeros que van retiran esa plata y después nos dividimos todos en partes iguales. Eso, en partes iguales. Y lo... eso, los vecinos que están siendo explotados, y eso, digo... están ganando \$1500 pesos y algunos, algunos como son “parientes de” ganan un poco más, pero ni siquiera les llegan a dar todo lo que están ganando. Entonces, digo... es una... Sí creemos que con respecto a otras organizaciones, en comparación... en comparación creo que sí estamos un paso adelante, pero en el buen sentido, ¿no? En lo organizativo y eso. Pero es una lucha que va a seguir (...)*”.

(Integrante del FPDS).

Algunos efectos representativos que surgen de la tensión provocada por la implementación del Plan Argentina Trabaja son la capacidad de la organización de articular las demandas de sus integrantes con las de otras organizaciones sociales para ejercer presión sobre el Estado (con el fin de lograr el ingreso al programa). Por otro lado resulta interesante señalar que las manifestaciones realizadas en este caso incentivaron la movilización posterior de otras organizaciones en otras provincias (en las que estaba programada la aplicación del PAT), situación que evidencia la capacidad del FPDS de superar los límites territoriales de los espacios donde ejerce mayor representación, al lograr agregar los intereses de miembros de otras jurisdicciones e incluso de organizaciones no afines al FPDS. Otro de los efectos observables en este caso es la capacidad de resistencia de la organización frente a presiones estatales, que se tradujeron en las restricciones al acceso al PAT e incluso una serie de episodios violentos ocurridos durante las treinta seis horas de acampe en que algunos manifestantes fueron

detenidos. La resistencia y presión ejercidas por las organizaciones adquirieron en este caso el sentido de una *accountability desde abajo*<sup>39</sup> al hacer pública la existencia de funcionamientos irregulares aún cuando no se haya logrado su erradicación.

Los efectos de subsidiariedad se refieren a la delegación de funciones estatales en asociaciones de la sociedad civil. Si bien en el caso del FPDS no es posible hablar de una delegación expresa y acordada de funciones por parte del Estado ya que como hemos visto a lo largo del segundo capítulo la asunción de tareas tradicionalmente estatales por parte de estas organizaciones fue a raíz de la ausencia del Estado más que por un acuerdo con este, nuestro trabajo de campo nos ha permitido observar que el FPDS asume aún en la actualidad la organización de diferentes instituciones como los bachilleratos populares, guarderías, comedores barriales, talleres de oficios, así como la organización y administración de las cooperativas inscriptas en el programa Argentina Trabaja. Ello ha sido posibilitado por estructuras alternativas de gobernanza que proveen oportunidades de participación a sus miembros.

Por otro lado hemos detectado que el FPDS ha sido capaz de articular acciones con otras organizaciones con las que comparte afinidad ideológica generando mecanismos de reciprocidad inter-organizacionales que le permiten aumentar sus capacidades de presión y agregar intereses en niveles más abarcativos superando los límites geográficos de su representación. Esto se manifestaba en las entrevistas a través de definiciones que caracterizaban al FPDS como una “organización simpática” que posibilita la inclusión de personas de diferentes orientaciones políticas de manera no restringida. Tanto los mecanismos participativos que hemos descripto como el carácter multisectorial de la organización juegan un rol determinante sobre este efecto

---

<sup>39</sup> El término fue trabajado por Natalucci *et. al* (2013) en *Territorios disputados. Movilización política y procesos de institucionalización en niveles locales de gobierno*.

de coordinación y cooperación del FPDS.

Finalmente hemos de mencionar los efectos de legitimación democrática que pueden o no tener estas organizaciones sobre las instituciones. Idealmente la legitimidad de la democracia (o de las instituciones democráticas) emana de las esferas públicas, es decir del apoyo que los ciudadanos brinden a las políticas estatales (Warren: 2001). De manera que un efecto democratizador de las organizaciones como el FPDS radica en la circulación de información al interior de las esferas públicas, aún cuando esta se desarrolle en forma de denuncia. Sobre este punto advertimos que la tensión entre organizaciones-gobierno no cuestionaba la legitimidad del programa Argentina Trabaja (al menos en un primer momento) sino que denunciaba las discrecionalidades ocurridas a nivel local sobre el manejo de esos planes; esto pudo haber operado en la percepción que otros sectores de la sociedad civil tienen sobre los movimientos sociales como el FPDS y al mismo tiempo haber estimulado un mayor control de la aplicación del programa por parte de la opinión pública<sup>40</sup>. Otro efecto identificable se relaciona con los procesos democráticos. Aún cuando existan “ganadores” y “perdedores” en la aplicación de cada política pública, una característica básica de la democracia es ofrecer la posibilidad a todos los actores de generar cambios en el mediano y largo plazo o, en otras palabras, de influir en los resultados de una decisión o del proceso por el cual se decide. La confianza en la durabilidad de estos procesos se afirma y hace más fluida cuando las organizaciones posibilitan a los ciudadanos influir en los resultados aún si no logran sus objetivos; de esta manera la posibilidad de participar en las esferas políticas legitima el sistema.

---

<sup>40</sup> Para mayor información sobre el funcionamiento del Plan Argentina Trabaja, sus logros y deficiencias pueden consultarse los trabajos de Juan Pablo Fernández (2012), *La implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” en ámbitos subnacionales*.

Identificar estos efectos nos permite visualizar cómo se conectan los procesos internos de la organización con los procesos democratizadores que afectan a las instituciones democráticas. De esta manera creemos poder aportar mayor densidad a los argumentos sobre la capacidad de los movimientos sociales de incidir en la arena pública política. Por otro lado habiendo desentrañado algunos de estos procesos podemos delimitar con mayor precisión qué factores tienden hacia la promoción de relaciones inclusivas y espacios discursivos que permitan el desarrollo de las preferencias y sentidos de los ciudadanos.



## **Conclusiones**

La pregunta inicial que motivó este trabajo fue sobre la capacidad de las organizaciones sociales de influir de alguna manera sobre las instituciones democráticas y eventualmente identificar si tales efectos eran positivos o negativos. A la luz de lo expuesto creemos que la crisis de representación de finales de 2001 tuvo una doble dimensión destructora y creadora de relaciones y fuerzas sociales. La síntesis y posterior evolución de esa coyuntura dieron lugar a algunas preguntas que orientaron nuestra investigación: ¿cómo afectan los movimientos sociales al sistema democrático?, ¿es posible observar el espacio invisible entre organizaciones sociales y Estado?, ¿es posible reconstruir las formas de relación entre ambos?. Para responder estas preguntas nos propusimos observar los efectos que las organizaciones sociales tienen sobre los sistemas democráticos. A partir de nuestro análisis creemos que el rol de los movimientos sociales fue preponderante en la reconfiguración de la relación Estado-sociedad a partir de la activación política que significaron los movimientos de trabajadores desocupados a mediados de los noventa. Creemos además que las relaciones entre el Estado y los nuevos movimientos sociales (como el FPDS) no pueden ser clasificadas como mera pasividad o pura resistencia sino que involucran procesos de negociación entre los actores que afectan a todos los participantes de la relación estimulando estrategias y actitudes nuevas en ambos extremos. En tal sentido, si bien la capacidad de los movimientos sociales de introducir demandas en la agenda de gobierno es un dato ya reconocido por la literatura sobre el tema creemos que en el caso estudiado dicha capacidad ha cumplido además una función de control de abajo hacia arriba al inducir el debate de la opinión pública sobre un programa específico como el Argentina Trabaja al denunciar irregularidades en su implementación; el dato cobra más relevancia al tener en cuenta que fueron

las poblaciones beneficiarias del programa las que realizaron los reclamos a riesgo de empeorar su situación cerrando canales de negociación informales a través de los cuales podrían haber llegado al mismo objetivo.

Por otro lado, al investigar los efectos que produce una organización como el FPDS nos encontramos con los elementos que los provocan y nos parece que esos elementos no deben ser desatendidos ya que creemos que las organizaciones con estructuras tendientes a reproducir mecanismos participativos y a valorizar y potenciar las capacidades políticas de sus individuos promueven procesos democratizadores aún cuando tales efectos no sean percibidos en gran escala. Esta observación nos permite discutir la idea de los condicionantes que plantea el estudio de Tilly y Wood sobre la capacidad de los movimientos sociales de promover procesos democráticos. Las condiciones que dichos autores observan tienen que ver con factores externos a los movimientos (básicamente la existencia de una administración centralizada y un “mínimo de democracia) mientras que en base a nuestro trabajo creemos que estudios de ese tipo se beneficiarían de incorporar una dimensión interna sobre la forma de organización de los movimientos para evaluar su potencialidad democratizadora. En tal sentido creemos que las prácticas que promueve una organización con una estructura interna vertical y jerarquizada no serán iguales y no producirán los mismos efectos que los que logre otra de tipo horizontal en la que se busque evitar las diferencias entre sus miembros. Si bien los límites de esta tesis sólo nos permiten insinuar esta observación como hipótesis, nos parece relevante en la medida en que será una línea de investigación de un próximo trabajo a desarrollar en el marco de una tesis doctoral con financiamiento del CONICET.

A su vez, creemos que la particularidad del FPDS de mantener una posición autónoma y

su capacidad de haber perdurado en el tiempo sin comprometer esa prerrogativa, también se liga a su estructura interna en la medida en que fue esa forma de organización la que le permitió reconstruir valores democráticos y solidarios así como promover la participación política de sus integrantes en contextos adversos, y que son esas mismas construcciones las que colaboran en la “democratización” de las instituciones democráticas. Dicho de otro modo, creemos que es la forma de la organización del movimiento basada en una dinámica asamblearia que se reproduce en distintos niveles la que promueve valores y creencias profundamente democráticas en sus integrantes. Esto sucede cuando los individuos se reconocen como portadores de una voz propia y de derechos que deben a su vez ser respetados y atendidos por el estado (tal aspecto se manifiesta en frases del tipo “mi voz vale” o “acá me escuchan”); y cuando, como vimos, el carácter asambleario de la toma de decisiones funciona como espacio de discusión y de formación en dos sentidos: por un lado haciendo circular la información de manera igualitaria, evitando que los integrantes monopolicen esa información sobre avances, logros y mecanismos de negociación y por otro lado como espacio de formación político-discursivo en donde los actores aprenden el significado de conceptos políticos estratégicos y la manera de operacionalizarlos tanto al interior de la organización como por fuera de ella en un amplio abanico de situaciones que abarca desde discusiones con familiares, con compañeros de militancia en las asambleas de la organización, una reunión con un funcionario, durante un piquete, o al ser interpelados por medios de comunicación.

Consideramos además que los mecanismos asamblearios y participativos como los utilizados por el FPDS operan favorablemente sobre condicionantes externos de los sujetos al romper el aislamiento de quienes ven en la organización una forma de recuperar derechos

vulnerados por determinados contextos estructurales como la desocupación, precarización de las condiciones de trabajo, presión ejercida por corporaciones, violencia de género, etc.

Las estrategias de acción colectiva que refuerzan el concepto de “solidaridad”, “compañerismo” y participación al interior de la organización y la horizontalidad interna del FPDS para la toma de decisiones es en gran medida lo que la diferencia de las formas clásicas de organización colectiva como los partidos y sindicatos. En este punto resulta interesante plantear como interrogante cuánto de la reactivación política que se observa durante los últimos años puede asociarse a los cambios y reagrupamientos que se dieron en el campo popular a mediados de los noventa para resistir las políticas neoliberales de ajuste.

En función de las características distintivas de los movimientos sociales señalada por Melucci (las redes sociales que establecen los movimientos y el lugar que ocupa en ellos el modo organizativo que se dan así mismos), creemos que la dinámica del FPDS coincide con esa observación al constatar el énfasis que los integrantes del FPDS ponen en el sostenimiento de la dinámica interna para tomar decisiones colectivas, convirtiendo a la estructura organizativa en un fin en sí mismo. Esto pudo haber limitado la capacidad de proyección de la organización y en parte colaborado a sumar tensión sobre las discusiones que atravesaron al FPDS durante los últimos años. No hemos abordado las rupturas que atravesó la organización desde el 2013 en adelante porque creemos que es preciso dar tiempo a los actores a reacomodarse y asentar sus posiciones para realizar un diagnóstico más certero sobre lo que los nuevos distanciamientos han provocado. Sin embargo, independientemente del resultado de este nuevo derrotero y aún si el FPDS no logra recomponerse, creemos que las prácticas aprehendidas durante doce años de militancia no mueren fuera de la organización sino muy por el contrario perduran en las

instituciones afectadas por ellos, en la memoria colectiva y en las experiencias de quienes se vieron involucrados en la organización, abriendo espacios y sembrando lugares para el desarrollo y la puesta en acto de los aprendizajes.

## Anexo I

### Instrumento de Recolección de Datos

Tesis: “Democracia y organizaciones sociales. Estudio de caso sobre el impacto de las organizaciones de base territorial en las instituciones democráticas”.

---

Pautas para las entrevistas en profundidad realizadas a los integrantes del FPDS.

En todos los casos se requirió a los entrevistados la firma de un formulario de consentimiento.

1. ¿Cuándo comenzó a ser parte del FPDS?
2. ¿Qué es el FPDS para usted? ¿Cómo lo definiría?
3. ¿Qué tipo de actividades o tareas realiza en el FPDS?
4. ¿Por qué decidió unirse al FPDS?
5. ¿Antes de unirse al FPDS participó en alguna otra organización con objetivos similares a los de la organización? ¿En cuál/es?
6. ¿De qué manera toma decisiones el FPDS?
7. ¿Usted puede participar de la toma de decisiones? ¿Y participa?
8. ¿Cuáles cree que son las actividades más importantes que desarrolla el FPDS? ¿por qué?.  
¿Las podría ordenar o priorizar?
9. ¿Considera su actividad en el FPDS como “actividad política”? ¿Qué significa para usted participar políticamente?
10. ¿Cuáles son sus principales aprendizajes a partir de su participación en el FPDS?
11. ¿Cómo cree que los vecinos del barrio visualizan a los integrantes del FPDS? ¿como organización piquetera; barrial; vecinal; movimiento?

12. ¿Han hecho actividades conjuntas con otros actores vecinales, barriales, comunitarios?
13. ¿Cómo es la articulación con otros movimientos sociales?
14. ¿Habla de política con otras personas además de sus compañeros del FPDS? ¿antes de participar en el frente le interesaba la política?
15. ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales del FPDS en relación a la causa por el asesinato de Darío y Maxi? ¿le parece que han logrado el objetivo? ¿Han desarrollado estrategias en torno a otras actividades o reclamos?
16. El FPDS emplea conceptos propios como “Poder popular”, “polo productivo”, “socialismo desde abajo”, “democracia de base”. ¿Porqué son importantes esos conceptos?
17. El FPDS se define en su página web como una “herramienta político-social con vocación estratégica” y a su vez declara como esencial “la unidad de la izquierda y del conjunto del campo popular en la construcción de poder desde abajo [...] sostener, fortalecer y ampliar la articulación y coordinación con otras organizaciones”. Ninguna de las organizaciones mencionadas a continuación de esa definición es un partido político. ¿Porqué?
18. ¿Cómo es la participación del FPDS en la Coordinadora de Movimientos Populares de Argentina (COMPA)? ¿y la articulación con las otras organizaciones sectoriales mencionadas en la web? ¿Realizan actividades en conjunto?
19. ¿Usted participó de movilizaciones en favor de reclamos del FPDS? ¿cuáles? ¿alguna era para apoyar los reclamos de otras organizaciones vinculadas al FPDS? Si/No: ¿porqué?
20. El FPDS ha realizado movilizaciones para eliminar lo “punteros” políticos. ¿Cree que han logrado evitar la mediación de los punteros?

21. En junio de 2006 se realizaron los primeros actos de “rebautismo” de la estación de Avellaneda. ¿Cómo fue el proceso que terminó en el cambio oficial del nombre de la estación a “Kosteki y Santillán”?
22. El FPDS, ¿ha realizado actividades en conjunto con alguna institución del gobierno local o nacional? (en caso afirmativo) ¿de qué tipo?. (en caso negativo) ¿porqué no?
23. ¿Qué significa el FPDS para usted?, ¿cómo lo definiría?.



## BIBLIOGRAFÍA

ABAL MEDINA, J. (h) (2004): “La muerte y la resurrección de la representación política”. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

ACUÑA, H., KESSLER, G., REPETTO, F. (2002), *Evolución de la política social argentina en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y en el proceso de hacer la política social*, Center of Latin American Social Policy (CLASPO). Austin: The University of Texas.

ACUÑA, C y VACCHIERI A. eds. (2007): “La Incidencia Política de las Sociedad Civil”. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

ACUÑA, C, JELÍN E. y KESSLER G. (2006), *Políticas sociales y acción local. 10 estudios de caso*. Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).

ALERTA ARGENTINA (2006), *Segundo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Gobierno Kirchner/2005*, [en línea], Buenos Aires. Disponible en: <http://www.maristellavampa.net/archivos/ddhh03.pdf>

ANNUNZIATTA, R. (2008), *Apostando a lo local: la “democracia de proximidad” en el Municipio de Morón*. Informe final del concurso: Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe, [en línea] Programa Regional de Becas CLACSO, [en línea]. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2008/gobpro/annun.pdf>

ANNUNZIATA, R. (2013), Una propuesta de clasificación de los dispositivos participativos en Argentina. *Postdata*, vol. 18, N° 2, 247-280.

ARDITI, B. (2008), Arguments about the left turns in Latin America. A Post-Liberal Politics. *Latin American Research Review*, Vol. 43, N° 3, 59-81.

BERRÍO PUERTA, A. (2006), La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. *Estudios Políticos* No. 29., 219-236.

BORÓN, A. (2004), *Reflexiones en torno al gobierno de Néstor Kirchner*. *Revista SAAP* Vol. 2, N°1, 187-205.

BUKSTEIN, G. (2008), Tiempo de oportunidades: el movimiento piquetero y la democratización en la Argentina, en Ciska Raventós (comp.), *Innovación democrática en el Sur: participación y representación en Asia, África y América Latina*. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

CACASE, A. y ALBORNOZ, P. (2012), *Fiscalización de los Planes Sociales en Argentina*. Buenos Aires, Auditoría General de la Nación.

CAMOU, A. y DI VIRGILIO, M. (2007), Participación ciudadana, gestión social y gobernabilidad: Las especificidades del nivel local en el Conurbano Bonaerense (Argentina), en M. Tanaka (coord.) *Dilemas*

*de la descentralización y de la participación en América Latina*. Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos en prensa.

CASTAÑEDA, J. (2006), Latin America's Left Turn. *Foreign Affairs*, Vol. 85, N° 3, 28-43.

CAVAROZZI, M. (1991), Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina. *Revista de Estudios políticos Nueva Epoca*, N° 74, 85-111.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS), (2003), *El Estado frente a la protesta social, 1996-2002*. Buenos Aires, CELS.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS) (2010), *Derechos humanos en Argentina. Informe 2010*. Buenos Aires, Siglo XXI.

CERRUTTI, M. y GRIMSON, A. (2004). Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares. *Cuadernos del IDES*, N° 5, 3-63.

CIEZA, H. G. (2004), *Borradores sobre la lucha social y la autonomía*, Buenos Aires: Manuel Suárez. (Colección de Ensayos Pensamiento Libre, N° 1).

CIEZA, H. G. (2006), *Borradores sobre la lucha popular y la organización*, Buenos Aires: Manuel Suárez. (Colección de Ensayos Pensamiento Libre, N° 2).

CIEZA, H. G. (2011), *Borradores sobre la lucha popular y la proyección política*, Buenos Aires, El Colectivo.

DAHL, R. (1989), *La Poliarquía*. Madrid. Ed. Tecnos.

DE PIERO, S. (2005): *Organizaciones de la Sociedad Civil. Tensiones de una agenda en construcción*. Buenos Aires, Paidós.

DELLA PORTA, D. y DIANI, M. (2011), *Los movimientos sociales*. (Vol. 4), CIS.

DIANI, M. (1992), The concept of social movement. *The sociological Review*, vol 40, N° 1, 1-25.

DINERSTEIN, A. (2004), Más allá de la Crisis. Acerca de la naturaleza del cambio político en Argentina. Economía y Ciencias Sociales. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. vol. 10. N° 01, 241-269.

DE SÁ CAVALCANTE, I. C. (2012), *Movimento Piqueteiro: Refluxo Da Radicalidade Ou Reinvenção Da Organização? . A Experiência Da Frente Popular Darío Santillán*. Tesis magistral presentada en la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Estadual de Londrina, Londrina.

DELAMATA, G. (2004). *Los barrios desbordados: las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires* (Vol. 8). Editorial Universitaria de Buenos Aires. EUDEBA.

EVANS, P. (1996). Government action, social capital and development: reviewing the evidence on synergy. *World Development*, vol. 24, N° 6, 1119-1132.

FERNANDEZ, P. (2012), *La implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” en ámbitos subnacionales*. Documento de trabajo N° 98, CIPPEC, Argentina.

FRENTE POPULAR DARIÓ SANTILLÁN (2012), *Darío y Maxi. Dignidad Piquetera. El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda*. Buenos Aires, El Colectivo.

FINOT, I. (2001), *Descentralización y participación en América Latina: teoría y práctica*, Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES.

FORNILLO, B.; GARCÍA, A. y VÁZQUEZ, M. (2008) Perfiles de la nueva izquierda en la Argentina reciente. Acerca de las transformaciones de los movimientos de trabajadores desocupados autónomos, *Contextos*, N° 1, 41-58.

GADANO N. (1998), *Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas de la Argentina*. Consultoría del Proyecto “Crecimiento, empleo y equidad: América Latina en los años 90”, HOL/97/6094.

GARCÍA, A.; PÉREZ, G. y VÁZQUEZ, M. (2007) “Poner el cuerpo”. Sobre los significados de la Masacre del Puente Pueyrredón, *Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires*, N° 67, 36-38.

GALLO, A. (2005), La democracia interna en el ámbito partidario. Un estudio comparado en partidos latinoamericanos. *Reflexión Política*, vol. 7, N° 14, 26-39.

GALLO, A. (2014), “Nueva izquierda” regional y nuevas reglas electorales. Análisis de la regulación oficial de las candidaturas en fuerzas gobernantes de América del Sur. *Revista SAAP, Vol. 8*, N° 1, 65-98.

GÓMEZ, J. (2012), La Masacre de Avellaneda en la historia reciente. A diez años. *Herramientas N° 50, [en línea]* Disponible en: <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-50/la-masacre-de-avellaneda-en-la-historia-reciente-diez-anos>

IPPOLITO, G. y O’DONNELL, G. (2008): La subversión del espacio público en América Latina, *Metapolítica*, vol. 12, N° 57; 10.

LEIRAS, M. (2007), La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas. En C. Acuña y A. Vacchieri (coords.) *La Incidencia Política de las Sociedad Civil*, (pp. 17-66). Buenos Aires. Siglo XXI.

LARAÑA, E. (1999), *La construcción de los movimientos sociales*. Madrid, Alianza.

LONGA, F. (2013), *Formas Organizativas y Subjetividad Política. Una lectura generacional de los ‘ethos militantes’ en el Frente Popular Darío Santillán*. Tesis magistral en Investigación en Ciencias Sociales, presentada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

- MASSETI, A. (2004). *Piqueteros: protesta social e identidad colectiva*. Buenos Aires, Coedición Ed. de las Ciencias-FLACSO.
- MASSETI, A. (2011), Las tres transformaciones de la política pública asistencial y su relación con las organizaciones sociopolíticas (2003-2009), *Entramados y perspectivas*, Vol. 1, N° 1, 9-37.
- MAZZEO, M., ACHA, O. y otros (2007), *Reflexiones sobre el poder popular*. Buenos Aires, Editorial El Colectivo.
- MAZZEO, M. (2007), *El sueño de una cosa. Introducción al poder popular*. Buenos Aires, Editorial El Colectivo.
- MAZZEO, M. (2011), *Poder popular y nación. Notas sobre el bicentenario de la Revolución de Mayo*. Buenos Aires, Editorial El Colectivo y Ediciones Herramienta.
- MAZZEO, M. (2012), *Conjurar a Babel. La nueva generación intelectual argentina a diez años de la rebelión popular de 2001*. Buenos Aires, Editorial El Colectivo.
- MAZZEO, M. (2012), *¿Qué (no) hacer?. Apuntes para un crítica de los regímenes emancipatorios*. Buenos Aires, Libros de Anarres.
- MC ADAM, D., MC CARTHY, J. y ZALD, M. (1999), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.
- MELUCCI, A. (2003), *Social Movements And Culture*. Londres, Routledge.
- MIGDAL, J. S. (1994). *State, Power and Social Forces. Domination and Transformation in the Third World*. Cambridge, Cambridge University Press.
- MTD Aníbal Verón (2003), *Darío y Maxi dignidad piquetera*. Buenos Aires, Ediciones 26 de junio.
- NATALUCCI, A., PÉREZ, G., SCHUSTER F. y GATTONI M. S. (2013), Territorios disputados. Movilización política y procesos de institucionalización en niveles locales de gobierno (Argentina, 2003-2011). *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública Departamento de Gestión Pública y Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno*, vol. II, N° 2, 139-159.
- NAVARRO, M. (1995), Democracia y reformas estructurales: explicaciones de la tolerancia popular al ajuste económico. *Desarrollo Económico – Revista de Ciencias Sociales*, vol. 35, N° 139, 443-466.
- NUN, J. (1987), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Buenos Aires. Punto Sur.
- O'DONNELL, G. (1997), *Contrapuntos. Ensayos Escogidos Sobre Autoritarismo y Democratización*. Buenos Aires. Ed. Paidós.
- OFFE, C. (1992), *Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales*, Madrid, Sistema.

- OVIEDO, L. (2001). *De las primeras coordinadoras al Argentinazo. Una historia del Movimiento Piquetero*. Buenos Aires, Rumbos.
- PACHECO, M. (2010), *De Cutral Có a Puente Pueyrredón. Una genealogía de los Movimientos de Trabajadores Desocupados*. Buenos Aires, Argentina, El Colectivo.
- PANIZZA, F. (2005), Unarmed Utopia Revisited: The Resurgence of Left-of-Centre Politics in Latin America. *Political Studies*, vol. 53, 716-734.
- PARAMIO, L. (2006). Giro a la izquierda y regreso del populismo. *Nueva Sociedad*, vol. 205, 62-74.
- PIERSON, P. (1994). *Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment*. Cambridge, University Press.
- PUIG, S. M. I (2004), Los movimientos sociales en un mundo globalizado: ¿alguna novedad?. *América Latina Hoy*, abril, N° 036 , 79-100.
- QUIRÓS, J. (2006), *Cruzando la Sarmiento: una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina, Antropofagia.
- RAMÍREZ GALLEGOS, F. (2006). Mucho más que dos izquierdas. *Nueva Sociedad*, vol. 205, 30-44.
- RONCONI, L. (2002) “El Programa TRABAJAR”, Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional (CEDI, Fundación Gobierno y Sociedad), Documento de Trabajo N° 63.
- ROSANVALLON, P. (2009). *La Legitimidad Democrática: Imparcialidad, reflexibilidad, proximidad*. (Trad. Heber Cardoso), Buenos Aires, Manantial. (Original en francés, 2008).
- SCHAMIS, H. (2006), A “Left Turn” in Latin America? Populism, Socialism, and Democratic Institutions. *Journal Of democracy*, vol. 17, N° 4, 20-34.
- SCHNEIDER, C. (2007a), *La participación ciudadana en el gobierno de Buenos Aires (1996-2004): El contexto político como explicación*. Fundació CIDOB, Barcelona.
- SCHNEIDER, C. (2007b), *La Participación Ciudadana en los Gobiernos Locales: Contexto Político y Cultura Política. Un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona*. Tesis Doctoral, UPF, Barcelona, 2007.
- SCHNEIDER, C. y WELP, Y. (2010) ¿Vino Nuevo en Odres Viejos?. Presentado en el Congreso Internacional “Profundizando la democracia como forma de vida. Desafíos de la democracia participativa y los aprendizajes ciudadanos en el Siglo XXI”, Rosario, Argentina, 13-16.
- SCHNEIDER, C y WELP, Y. (2011). ¿Transformación democrática o control político? Análisis comparado de la participación institucional en América del Sur, en *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. N°. 40, 21-39.

SCHUSTER, F. et. al. (2002), *La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre del 2001*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Informe de Coyuntura N° 3.

SCHUSTER, F. et. al. (2006), *Transformaciones de la protesta social en la Argentina 1989-2003*, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Informe de Coyuntura N° 48.

SMITH, W. (1993), Reestructuración neoliberal y escenarios políticos en América Latina, *Nueva Sociedad*, vol. 126, 25-39.

SVAMPA, M. y PANDOLFI, C. (2004). Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina, en *Observatorio Social de América Latina/OSAL*, N° 14. CLACSO.

SVAMPA, M. (2004) . *Relaciones peligrosas. Sobre las clases medias, gobierno peronista y movimientos piqueteros*. El Rodaballo. Revista de política y Cultura. Año X, Nro. 15, Invierno 2004, pp. 3-9.

SVAMPA, M. (2008). Argentina: Una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo. *Revista Osal*, N° 24.

SVAMPA, M. y PEREYRA, S. (2009). *Entre la ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Biblos.

TAPIA, L. (2006). *La composición política, o la nueva composición política en Bolivia*. En Tapia, L. et. al., *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia*, (245-265). La Paz, Bolivia, Tercera Piel.

TARROW, S. (2004), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, (Trad. Muñoz de Bustillo, F.), Madrid, Alianza, (Original en Inglés 1998).

TOMASSINI, L., ARMIJO, M. (2002), *Reforma y Modernización Del Estado: Experiencias y Desafíos*. Santiago de Chile, Ed. LOM.

TORRE, J. C. (1998), *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*. Buenos Aires, Paidós.

TORRES-RIVAS, E. (1993): "América Latina. Gobernabilidad y democracia en sociedades en crisis". *Revista Nueva Sociedad*, N° 128, 88-101.

TARROW, S. (2004), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, (Trad. Muñoz de Bustillo), Madrid, Alianza (Original en inglés 1998).

TILLY, C. y WOOD, L. J. (2010), *Los movimientos sociales, 1768-2009: Desde sus orígenes a Facebook*, Barcelona, España, Egedsa.

TORRE, J. C. (1998), *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*. Paidós, Buenos Aires.

TOURAINÉ, A. (1988), *Return of the actor: Social Theory in Postindustrial Society*. EEUU, University of Minnesota Press.

VÁZQUEZ, M. Y VOMARRO, P. (2009), Sentidos y prácticas de la política entre la juventud organizada de los barrios populares en la Argentina reciente, *Cuadernos del CENDES, Universidad Central de Venezuela*, vol. 26, N° 70, 47-68.

VÁZQUEZ, M. (2012), Liderazgo y compromiso político desde una mirada diacrónica: una aproximación a tres generaciones de jóvenes militantes en movimientos de desocupados. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, año 17, N° 57, 49-63.

WARREN, M. (2001), *Democracy and Association*. Princeton, University Press.

WARREN, M. (2006), Political Corruption as Duplicitous Exclusion, *Political Science and Politics*, vol 39, N° 4, 803-807.

WILLIAMSON, J. (2004). *A Short History of the Washington Consensus*. Paper presentado en la Conferencia: From the Washington Consensus towards a new Global Governance. Barcelona, Fundación CIDOB.

## Fuentes consultadas

### Dario Página 12

- Bruschtein, L. (24 de enero de 2002), Cacerolas autoconvocadas y cortes de piqueteros, *Página 12*.
- Vales, L. (21 de junio de 2003), Ese día de la muerte, *Página 12*.
- Piqué, M. (31 de octubre de 2003), Desandando el sinuoso camino, *Página 12*.
- Schurman, D. (24 de junio de 2004), Cuando habló antes, significó dos muertos, *Página 12*.
- Meyer, A. (25 de junio de 2004), Buscando al que dió la orden, *Página 12*.
- Vales, L. (25 de junio de 2004), Duahlde debía hacer una demostración de fuerza, *Página 12*.
- Vales, L. (26 de junio de 2004), A dos años, por Kosteki y Santillán, *Página 12*.
- Meyer, A. (26 de junio de 2004), Por ahora condena social, *Página 12*.
- Castigo a todos los responsables (27 de diciembre de 2003), *Página 12*.
- Vales, L. (27 de marzo de 2004) A veintiún meses de los asesinatos, *Página 12*.
- A veintidós meses de la Masacre de Avellaneda (27 de abril de 2004), *Página 12*.
- Vales, L. (21 de junio de 2004), De las Críticas oficiales a las nuevas estrategias, *Página 12*.
- Vales, L. (27 de septiembre de 2004), Dos cortes en un puente por Kosteki y Santillán, *Página 12*.
- Vales, L. (23 de octubre de 2004), Más presos por las tierras, *Página 12*.
- El corte fue consensuado (26 de octubre de 2004), *Página 12*.
- Vales, L. (25 de noviembre de 2004), Una Comisión no Gubernamental, *Página 12*.
- Vales, L. (27 de noviembre de 2004), Reclamo por la masacre de Avellaneda, *Página 12*.
- A casi treinta meses, seguimos con las manos vacías de justicia, (27 de diciembre de 2004), *Página 12*.
- Vales, L. (27 de enero de 2005), Piqueteros y familiares de Kosteki y Santillán esgracharon a Álvarez, *Página 12*.
- Otras Voces (28 de mayo de 2005), *Página 12*.

- Vales, L. (26 de junio 2005), Imágenes que prueban quién disparó, *Página 12*.
- Pertot, W. (26 de junio 2005), Primer acto para recordar a Darío y MaxiC, *Página 12*.
- “Sigue la impunidad, sigue la lucha” (27 de junio de 2005), *Página 12*.
- Vales, L. (01 de julio de 2005), Secreto levantado a medias, *Página 12*.
- Pertot, W. (11 de septiembre de 2005), No queremos ver quien es más guapo, *Página 12*.
- Vales, L. (06 de enero de 2006), Esto es sólo el comienzo, *Página 12*.
- Vales, L. (09 de enero de 2006), Darío hizo lo que muchos deberíamos haber hecho, *Página 12*.
- Vales, L. (25 de junio de 2006), Fue la estación de los asesinatos y ahora se llamará “Darío y Maxi”, *Página 12*.
- En vigilia pese a la lluvia (26 de junio de 2006), *Página 12*.
- Reclamo por casas (16 de agosto de 2006), *Página 12*.
- Dandan, A. (26 de junio de 2007), Con la memoria en Avellaneda, *Página 12*.
- Vigilia en la estación (26 de junio de 2008), *Página 12*.
- Vales, L. (27 de junio de 2009), Un masivo mensaje para la justicia, *Página 12*.
- Con la carpa a la 9 de julio (03 de noviembre de 2009), *Página 12*.
- Vales, L. (04 de noviembre de 2009), Los piqueteros levantaron campamento, *Página 12*.
- Queremos cooperativas (12 de noviembre de 2009), *Página 12*.
- El campamento no se levanta (03 de diciembre de 2009), *Página 12*.
- Vales, L. (17 de diciembre de 2009), Carpas sobre la avenida, *Página 12*.
- Con la marcha se levantó el acampe (18 de diciembre de 2009), *Página 12*.
- Campamento levantado (22 de enero de 2010), *Página 12*.
- Vales, L. (12 de febrero de 2010), Ya hay más de 100 mil inscriptos, *Página 12*.
- Con piquete sobre la avenida, (24 de febrero de 2010), *Página 12*.
- Con reclamos y repudios en la 9 de julio, (15 de diciembre de 2010), *Página 12*.
- Pérez, A. (26 de junio de 2010), Tras los autores intelectuales, *Página 12*.
- Vales, L. (27 de junio de 2010), Duhalde, candidato a la cárcel, *Página 12*.
- El corte del Puente, (27 de junio de 2011), *Página 12*.
- Vales, L. (24 de junio de 2012), Diez años después, *Página 12*.
- Diez años sin Darío y Maxi, (26 de junio de 2012), *Página 12*.
- Una jornada cultural (25 de junio de 2012), *Página 12*.
- El nombre de la estación, (28 de junio de 2012), *Página 12*.
- A 11 años de la Masacre de Avellaneda (26 de junio de 2013), *Página 12*.
- Ahora se llama Santillán y Kosteki (14 de noviembre de 2013), *Página 12*.
- Vanina Kosteki: "La impunidad sigue vigente" (26 de junio de 2014), *Página 12*.

#### Diario La Nación

- Carini, M. (14 de abril de 1996), Indiferencia en los porteños, *La Nación*.
- Sued, G. (10 de junio de 2003), Kirchner recibió los reclamos de los piqueteros duros, *La Nación*.
- Riva, A. (26 de junio de 2006), Masivo reclamo por las muertes de Avellaneda, *La Nación*.
- Reclamo de justicia por Kosteki y Santillán (26 de junio de 2008), *La Nación*.
- Lalurette, S. (22 de octubre de 2009), La pelea por fondos sociales, en medio del escándalo de Pérsico, *La Nación*.
- Liberaron el puente Pueyrredón (26 de junio de 2009), *La Nación*.
- Avanza la unión de los rebeldes (04 de diciembre de 2009), *La Nación*.
- Diferencias y fuerte reclamos en el acto central por Kosteki y Santillán, (26 de junio de 2010), *La Nación*.



- Vigilia a ocho años de los crímenes de Kosteki y Santillán (26 de junio de 2010), *La Nación*.
- Cómo funcionan las cuadrillas que manejan los planes sociales (17 de enero de 2012), *La Nación*.
- Sued, G. (17 de enero de 2012), El Movimiento Evita, otro polo de poder en el kirchnerismo, *La Nación*, Política.
- Caminos, M. (26 de junio de 2012), A diez años de la masacre de Avellaneda, sigue el reclamo de justicia, *La Nación*.
- Recordaron a Kosteki y Santillán y exigieron que avance la causa contra Duhalde (26 de junio de 2014), *La Nación*.

### **Diario Clarín**

- Los jóvenes y las próximas elecciones, 19 de septiembre de 199, *Clarín*, Editorial.
- Thieberger, M. (22 de febrero de 2004), Ofensiva del Gobierno para limitar a los piqueteros duros, *Clarín*.
- Denuncian que la Policía tiró balas de goma, (26 de junio de 2011), *Clarín*.
- Mateos, J. (26 de junio de 2012), Un renovado pedido de Justicia, a 10 años de la Masacre de Avellaneda, *Clarín*.
- Fioriti, S. (27 de junio de 2012), Fuertes críticas al Gobierno en el homenaje a Kosteki y Santillán, *Clarín*.
- Paladini, E. (27 de junio de 2012), Promesas incumplidas, *Clarín*.
- Finalizó el acto en el Puente Pueyrredón, a doce años de la Masacre de Avellaneda (26 de junio de 2014), *Clarín*.

### **Otros periódicos consultados**

#### **El Estadista**

- Movimiento Evita: el aliado silencioso del kirchnerismo, ( 22 de junio de 2012), *El Estadista*. [En línea], disponible en: <http://elestadista.com.ar/?p=2392>

#### **Infobae**

- Piqueteros duros protestaron frente a la sede de Repsol, (26 de octubre de 2005), *Infobae*. [En línea], disponible en: <http://www.infobae.com/2005/10/06/214922-piqueteros-duros-protestaron-frente-la-sede-repsol>.

#### **Diario de Cuyo**

- Gesto de Kirchner a los piqueteros duros (28 de septiembre de 2004), *Diario de Cuyo*. [En línea], disponible en: [http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new\\_noticia.php?noticia\\_id=58928](http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=58928)

#### **Chequeado.com**

- Di Santi, M. (26 de abril de 2012), El Plan Argentina Trabaja, números y deficiencias, *Chequeado.com*. [En línea], disponible en: <http://www.chequeado.com/el-explicador/1024-el-plan-argentina-trabaja-numeros-y-deficiencias.html>.

### **Otras fuentes consultadas**

- Mirra, M. (2012), Darío Santillán, la Dignidad Rebelde. [Video]. Disponible en: [https://www.youtube.com/watch?v=Xm4rG\\_\\_XTc0](https://www.youtube.com/watch?v=Xm4rG__XTc0)

- La Presidenta anunció incentivos a cooperativistas "Plan Argentina Trabaja." [Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=z1-48RI-u4E>
- Frente Popular Darío Santillán (2013), Plenario Nacional 2013 - video apertura = Frente Popular Darío Santillán (FPDS), [Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=dpvLGLtXSzo>
- Frente Popular Darío Santillán (2014), Alberto Santillán y Federico Orchani en A24 informe especial a 12 años de la Masacre de Avellaneda [video], disponible en: [https://www.youtube.com/watch?v=rO57N\\_gI3dU](https://www.youtube.com/watch?v=rO57N_gI3dU).

#### **Sitios web consultados**

<http://frentedariosantillan.org/>

<http://www.indec.mecon.ar/>

<http://www.marcha.org.ar/>

<http://www.cippecc.org>

<http://www.presidencia.gob.ar>

<http://www.desarrollosocial.gov.ar>